



Facultad de Filosofía y Letras
Máster en Historia Contemporánea

LA LIBERTAD DE PRENSA EN ESPAÑA DURANTE LA
SEGUNDA REPÚBLICA

The liberty of the press in Spain during the Second Republic

Pilar Higuera García

Director/a: Aurora Garrido Martín

Curso 2018 / 2019

ÍNDICE

ÍNDICE	1
1.- INTRODUCCIÓN.....	2
2.- LA PRENSA Y SU RELACIÓN CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS.....	6
3. EL MARCO LEGAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA Y SU APLICACIÓN.....	15
3.1. El Gobierno Provisional	15
3.2. El Primer Bienio:.....	29
3.3. El Segundo Bienio.....	39
3.4. El Gobierno del Frente Popular	49
4. CONCLUSIÓN	57
5. BIBLIOGRAFÍA.....	61

1.- INTRODUCCIÓN

El 14 de abril de 1931 es la fecha en que comenzó la Segunda República española. Se trató éste de un periodo breve pero muy intenso de la historia de España en el que se sucedieron gobiernos de distintas ideologías. La intención de este trabajo es la de acercarnos al estudio del control de la opinión pública a través del análisis de la regulación de la libertad de prensa que hicieron los diferentes gobiernos en dicho periodo.

Fue, según Capellán de Miguel, el liberalismo el que dio a este término, opinión pública, su sentido moderno, político¹. La opinión pública se convirtió así en los siglos XIX y XX en un elemento sustancial de los regímenes liberales, la base desde donde se construye el edificio de los sistemas liberal y liberal democrático; y algo indisociable a la opinión pública es la libertad de imprenta, porque es el único medio de conocerla. En este sentido, la identificación que se produce, desde el siglo XIX hasta los años treinta del siglo XX, de la opinión pública básicamente con la prensa convirtió a ésta en el principal objeto de las limitaciones que se establecieron a dicha libertad. Hemos de tener en cuenta que el momento que ocupa nuestra atención coincide con la aparición de la denominada sociedad de masas, donde el control de la opinión pública, identificada con esas masas, era algo fundamental para mantenerse en el poder y también para llegar a él. Quien controlase la opinión pública, controlaría el poder, y los medios se convirtieron en el principal instrumento para lograrlo. Esto no era algo totalmente nuevo, los gobernantes españoles fueron conscientes desde muy temprano, antes de la Edad Contemporánea, del gran poder de los medios escritos de difusión. Así, la legislación ya se ocupó de las publicaciones desde tiempos de los Reyes Católicos².

Las posiciones de poder permiten a quién las ostenta decidir cuáles son las cuestiones pertinentes en cada momento. En este sentido, la prensa tuvo y tiene un gran poder, porque pone en primera plana aquello que considera oportuno. Para gobernar, no siempre hace falta entrar en política, sino generar una opinión. Un ejemplo de ello lo tenemos en estas palabras de Unamuno:

¹ CAPELLÁN DE MIGUEL, G.: “La opinión secuestrada. Prensa y opinión pública en el s. XIX”, en Berceo, nº 159, Logroño, 2010, pp. 23-62.

² CENDÁN PAZOS, F.: *Historia del derecho español de prensa e imprenta (1502-1966)*. Madrid, Editora Nacional, 1974, pp. 23-24.

“¿Qué si hago política activa? Según a lo que se llame política activa. Porque hay quien cree que eso es estar en un partido. Para mí es lo otro. Recuerdo que una vez, dirigiéndose a mí, me dijo Melquíades Álvarez: «Eso que usted hace, don Miguel, le puede hacer un escritor, un filósofo, un pensador; pero no un hombre que aspire a gobernar». Yo le contesté: «Es que yo no aspiro a gobernar: yo gobierno»³.

A partir del siglo XIX, por tanto, se intentó, desde el poder, un control de esa opinión pública, ya fuera mediante propaganda de Estado⁴, tema que no vamos a tratar en este trabajo, ya mediante el control de la prensa, que es precisamente en lo que nos vamos a centrar. Como se ha señalado, la forma en la que el poder intentó hacerse con el control de la opinión fue a través de la legislación limitativa del derecho a la libertad de imprenta, y esto, lógicamente, afectó a la prensa directamente.

En la Segunda República se dio un cambio sustancial con respecto al régimen anterior, la Dictadura de Primo de Rivera. José Manuel Morales Tamaral muestra, por ejemplo, cómo además de que en la dictadura primoriverista los esfuerzos se centraron en crear «una estrategia estatal de comunicación planificada e integral»⁵, nada más triunfar el golpe de estado del 13 de septiembre de 1923, las garantías constitucionales quedaron en suspenso y entró en vigor la Ley de Orden Público de 23 de abril de 1870, que daba a los gobernadores civiles poder para suspender una publicación sin necesidad de acudir a los tribunales. Desde ese momento, además, se implantó la censura previa y se creó todo un entramado institucional que permitiera el control de la opinión. Se trataba de un momento en el que la opinión de las recién aparecidas “masas” era determinante para la legitimación de la autoridad. Esas masas tenían mucho poder, ahora participaban en la

³ Miguel de Unamuno, *Heraldo de Madrid*, 18-IV-1935, en SUÁREZ CORTINA, M.: *Los caballeros de la razón. Cultura institucionista y democracia parlamentaria en la España Liberal*, Santander, Genuève, 2019, p. 266.

⁴ Para una ampliación de la información en esta línea véanse los trabajos de NIÑO, A.: “La propaganda institucional en los regímenes Liberales y el debate sobre el control de la opinión pública”, en MORENTE, F Y RODRIGO, J.: *Tierras de nadie. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias*, Granada, Comares Historia, 2014; LASSWELL, H.: “The person: subject and object of propaganda”, *The annals of American academy of political and social science*, Vol. 179. Mayo, 1935, pp. 187-193. Lasswell, Harold D. (1981). “The interconnections of political power, psychotherapy, and world community,” *Political Communication and Persuasion* 1: 107–125.

⁵ MORALES TAMARAL, J.M.: “No se puede ser gobernante en tiempos de opinión sin ser algo periodista. La propaganda estatal bajo la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)”, en *La Historia, lost in translation?: Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea*, Cuenca, Universidad Castilla-la Mancha, 2017.

política y podían alterar el orden público, es por esto por lo que Primo de Rivera se esforzó en supervisar la información que les llegaba, pues el mantenimiento del orden era una cuestión fundamental para la pervivencia del régimen instaurado. Sin embargo, el hecho de que la Segunda República fuera un régimen democrático, no obsta para que también usara legislación previa y desarrollara la suya propia para llevar a cabo ese control de la opinión pública a través de la fiscalización de las publicaciones.

Para hacer este estudio de carácter bibliográfico, la información de que hemos dispuesto no es muy abundante, ya que ha sido en los últimos años, cuando el interés por este tema ha ido en aumento y han surgido una serie de obras muy interesantes que nos han ayudado a acercarnos al objeto de estudio. En ellas, veremos cómo, en líneas generales, se adopta una actitud crítica hacia la relación de los gobiernos de la República en España con la libertad de imprenta. Manuel Balbé, por ejemplo, considera que el hecho mismo de tener unas «normas indeterminadas y abstractas (...) comportan un estado de inseguridad e intimidación general», para este autor, el problema no está en la aplicación sino en la existencia misma de las leyes⁶. No es éste el único autor que cuestione la forma en la que fue tratada la libertad de expresión en la Segunda República, también Martínez Pineda, Gómez Aparicio, Justino Sinova o Checa Godoy, por ejemplo, critican muchas de las medidas legislativas y su aplicación en el período. Quizás, uno de los pocos autores que se aleja de estas interpretaciones es Galo Hernández, para quién la Segunda República representa el período de la historia contemporánea de España donde la libertad de expresión estuvo menos coartada ya que, según él, la aplicación real de estas medidas coercitivas no fue tan estricta como parece, salvo, eso sí, en momentos puntuales en los que la defensa del orden público requería actuaciones excepcionales y temporales⁷. También cabría mencionar en este sentido, la aportación de Celso Almuíña, quien señala que «la tragedia de la Segunda República es que no pudo ser un paradigma, como pretendía (filosofía) de la libertad de expresión»,

⁶ BALBÉ, M.: *Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1923)*, Madrid, Alianza Universidad, 1985, p. 329.

⁷ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, G.: “La situación real de la libertad de prensa en España durante la II República: los límites a la aplicación de la libertad de prensa”, en *Comunicación y pluralismo*, nº4, 2007, pp. 119-138, p.134.

tanto por los factores de tipo internacional como también de carácter interno que hubo de afrontar⁸.

Comenzaremos, pues, este trabajo con una presentación de cuáles eran las principales cabeceras existentes en ese momento en España, señalando sus vinculaciones ideológicas y partidarias, ya que esto determinó su relación con los distintos gobiernos y, por ende, el trato que recibieron en cada período. También ello es un indicador del grado de libertad de expresión existente, ya que la presencia misma de cabeceras de distintas ideologías es ya un signo de apertura y cambio sustancial con respecto al período anterior⁹. Pasaremos después a ver cuáles fueron esas medidas limitativas de la libertad de imprenta y, en la medida de lo posible, cómo se aplicaron en los diferentes períodos que conformaron este régimen. Este último propósito cuenta con la dificultad añadida de no disponer de demasiadas obras que recojan esta información.

⁸ ALMUIÑA, C., “Prensa republicana y opinión pública en España entre 1868 y 1936”, en CHECA, A., ESPEJO, C., LANGA, C., VÁZQUEZ, M. (COORDS) *La comunicación durante la Segunda República y la Guerra Civil*. Madrid, Fragua, 2008, *op. cit.*, p. 7.

⁹ *Ibidem*.

2.- LA PRENSA Y SU RELACIÓN CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

Tras el fin de la Dictadura de Primo de Rivera, se produjo un crecimiento del número de periódicos en todo el territorio peninsular, que alcanzó su punto álgido en las semanas que antecedieron a las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Según Sánchez Aranda y Carlos Barrera, existió una continuidad respecto al período anterior a la proclamación de la Segunda República, que se manifestó, por un lado, en el mantenimiento de los grandes diarios como *ABC*, *El Debate*, *El Sol*, *El Liberal*... y, por otro, en el intento de control de éstos por parte del gobierno¹⁰. Los periódicos, a consecuencia de un fuerte clima de politización, se convirtieron, en su mayoría, en prensa de partido y funcionaron como vehículos de propaganda y discusión política e ideológica en el período histórico con más índice de lectura entre la población¹¹. Esta situación permitió la convivencia de varias publicaciones con distinta periodicidad afines a cada organización política¹², lo que representó un panorama periodístico muy rico pero también muy complejo. Dicha circunstancia hace necesaria una selección¹³ de las principales cabeceras para acercarnos a la relación de la prensa con las distintas corrientes ideológicas y los partidos existentes en el momento, teniendo en cuenta también que muchos de estos periódicos eran empresas independientes de las plataformas políticas a las que alentaban¹⁴. A la publicación de periódicos, se sumó la de revistas, que iban desde la extrema derecha, como *El Fascio*, a la extrema izquierda, como *Bolchevismo*, pero que no vamos a tratar en este trabajo.

En efecto, la importancia de la prensa en este periodo fue tal que, la definida por Azorín como «República de intelectuales»¹⁵, dada la gran calidad y cantidad de aquéllos

¹⁰SÁNCHEZ ARANDA, J.J y BARRERA DEL BARRIO, C.: *Historia del periodismo español. Desde sus orígenes hasta 1975*. Pamplona, Eunsa, 1992, p.323.

¹¹GUERRERO MORENO, A.: “La prensa en la Segunda República: breve aproximación como contexto vital de don Diego Martínez Barrio”, en *Ámbitos*, 7-8, 2001, pp. 327-337.

¹²MELÉNDEZ MALAVÉ, N.; RAMOS LOZANO, M.^a P.; VERA BALANZA M.^a T.: “Ilusiones republicanas en la prensa local. El caso de dos periódicos malagueños en las vísperas de 1931”, en CHECA, A.; ESPEJO, C.; LANGA, C.; VÁZQUEZ, M. (COORDS): *La comunicación durante la Segunda República y la Guerra Civil*. Madrid, Fragua, 2008, p. 254.

¹³Para una ampliación de esta información véase el índice de diarios de CHECA GODOY, A.: *Prensa y partidos políticos durante la II República*. Madrid, Universidad de Salamanca, 1989, pp, 277-318.

¹⁴BARREIRO, C.: “Aproximación al estudio de la prensa durante la Segunda República”, en *RE-Presentaciones*, Nº 3, 2007, pp.57-76.

¹⁵FUSI, JP.: *Un siglo de España. La cultura*. Madrid, Marcial Pons, 1999, p, 70.

que participaron en este proyecto, bien podría llamarse «República de periodistas»¹⁶, debido al importante número de éstos que se implicaron en ella, ya que en las Cortes Constituyentes de 1931 se sentaron 47 periodistas. Salvo contadas excepciones como *ABC*, *La Época* o *La Nación*, que siguieron declarándose fieles a la Monarquía, la mayoría de periódicos participaron en el juego democrático desde sus respectivas posiciones políticas. Esta situación provocó, por un lado, un pluralismo ideológico en la panorámica de la prensa del momento y, por otro, la falta de una prensa de gobierno propiamente dicha, que defendiera las tesis que emanaban de éste¹⁷.

Entre la prensa republicana, destacaba *El Heraldo de Madrid* (1890-1939), en origen adepto al partido liberal, que se convirtió en uno de los principales defensores de los partidos republicanos de izquierda. Su director, Francisco Villanueva, llevó a este periódico diario a superar los 100.000 ejemplares. En esta línea, se encontraba también *El Liberal* (1879-1939), que fue uno de los más leídos en Madrid. Estuvo dirigido por Francisco Villanueva Oñate, que dio al diario una orientación templada dentro del republicanismo. Asimismo, cabe mencionar a *Luz* (1932-1934), fundado por Nicolás M^a de Urigoti tras el fracaso de su anterior apuesta con el *Crisol* (1931). Su importancia vendrá derivada de su vinculación con *El Sol* y *La Voz*, que, por un breve periodo de tiempo, constituirán el «Trust» bajo la propiedad de Luis Miquel, tras hacerse con estos dos últimos y convertirse en presidente de su Consejo de Administración. Se trató de una empresa que no duró mucho, pues *Luz* dejó de publicarse en 1934 y los otros dos periódicos siguieron trayectorias separadas. *El Sol* (1917-1939) según Checa Godoy, se conservadurizó, debido a una inyección monetaria en 1931, y llegó a mostrar inclinaciones monárquicas bajo la dirección de Manuel Aznar¹⁸. En 1932 volvió a dar un giro a la izquierda y pasó a ser republicano templado. Su trayectoria fue fluctuando dentro del republicanismo debido a los frecuentes cambios en su dirección. En cuanto a *La Voz* (1920-1939), se trató también de un diario de tarde madrileño y tuvo una difusión mucho mayor que su compañero *El Sol*, quizás por la estabilidad derivada de un director de larga trayectoria como fue Fabián Vidal, seudónimo de Enrique Fajardo.

¹⁶CHECA GODOY, A.: *Prensa ..., op. cit.*, p. 17.

¹⁷ALMUIÑA, C. : “Prensa republicana y opinión pública en España entre 1868 y 1936”, en CHECA, A., ESPEJO, C., LANGA, C., VÁZQUEZ, M. (COORDS) *La comunicación durante la Segunda República y la Guerra Civil*. Madrid, Fragua, 2008, pp. 27-28.

¹⁸CHECA GODOY, A.: *Prensa y partidos..., op. cit.*, p. 310.

Estos periódicos, aunque podríamos considerarlos ideológicamente republicanos, no presentaron una vinculación directa con los grupos políticos republicanos. Dentro de los que sí la tuvieron, se podría hacer una división entre la prensa republicana de izquierda (vinculada a azañistas, radical-socialistas, federales, Unión Republicana e Izquierda Republicana), el republicanismo independiente y de centro (relacionada con radicales y mauristas). A este sector, pertenecieron cabeceras como *El Radical* (1931), que fue un efímero intento del Partido Republicano Liberal por dotarse de un diario de ámbito nacional, pero no llegó a cumplir un mes de vida, aunque este partido contaba con numerosos periódicos locales en el país. Dentro del republicanismo conservador, aparecen pocas publicaciones destacadas. El Partido Liberal Republicano de Alcalá Zamora y Miguel Maura contó con un diario alicantino, *El Correo* (1898-1933), que se mantuvo afín al partido liberal, por lo que se convirtió en seguidor de Alcalá Zamora y, desde 1931 hasta 1933, año en que desapareció, se autoproclamó defensor de la Derecha Liberal Republicana, primero, y del Partido Republicano Progresista, después. El semanario *Nueva Política* (1933-1934) fue órgano oficial, en Madrid, del Partido Republicano Conservador de Miguel Maura. *El Noroeste* (1897-1937) fue un gran diario de información gijonés que surgió representando a la izquierda en la ciudad y, tras ser adquirido por el Partido Liberal Demócrata de Melquíades Álvarez en los años 30, conservadurizó su contenido. *El Pueblo Gallego* (1924-1979), nacido en Vigo durante la República, fue órgano de Portela Valladares, republicano templado y principal exponente en la prensa del proyecto de partido centrista. Más adelante será adquirido por Falange y, aunque perdió audiencia, logró sobrevivir hasta 1979.

En lo que respecta a la prensa republicana de izquierda, se distribuyó de forma irregular en el país y, mientras en Madrid, Barcelona, Levante y Murcia llegó a tener fuerza, su presencia fue mínima en las dos Castillas, Extremadura, País Vasco y Navarra. A ella pertenecieron cabeceras como las que señalamos a continuación. En Madrid, *Política* (1935-1939), nació en mayo como semanario y pasó a convertirse en diario a partir de octubre de 1935 con el subtítulo *Diario Republicano de Izquierdas*. A pesar de su corta trayectoria, gozó de bastante popularidad siendo órgano de Izquierda Republicana. Continuando en esta línea, el tercer grupo parlamentario en el Congreso Constituyente, el Partido Republicano Radical Socialista, contó con algún diario propio, como *El Noroeste* (1896-1936), importante diario de La Coruña. Fue el principal órgano

republicano radical-socialista en Galicia, que después defendió a Unión Republicana. *El Diario de Tarragona* (1853-1939) que, por su dilatada publicación en el tiempo, se convirtió en un eje histórico del periodismo en Tarragona, en la II República pasó a ser un periódico republicano de izquierda defensor del Partido Radical-Socialista. En Alicante, el principal periódico fue *El Luchador* (1913-1939), heredero de *El Graduador*. En un primer momento, fue órgano del radical socialismo y después, de Izquierda Republicana. En Murcia, destacó *La Región* (1932-1933), periódico que fue afín al Partido Republicano Radical Socialista y desapareció por cuestiones económicas. Fueron una serie de publicaciones que, aunque no tuvieron una tirada nacional, se convirtieron en las más leídas de sus respectivos territorios. En Málaga, surgió en 1930 *Rebelión*, y pasó a ser órgano de opinión del Partido Radical-Socialista en oposición abierta a la monarquía. El hecho de que su personal de redacción estuviese compuesto por líderes políticos y no por periodistas le permitió aportar una perspectiva novedosa que facilitó el conocimiento de la realidad de aquel momento desde distintas posiciones, no propiamente periodísticas¹⁹. En Valencia, el Partido Radical Socialista recibió apoyo explícito de *El mercantil valenciano* (1872-1939) cuyo director, Vicente Fe Castell, fue, en 1936, candidato por el Frente Popular. Por otro lado, en apoyo del Partido Republicano Democrático Federal en Barcelona, tenemos a *El Diluvio* (1853-1939), sucesor de *El Telégrafo*. Éste fue un diario de clara significación republicana, que llegó a convertirse en órgano expreso de este partido durante la Guerra Civil.

Además de con una prensa republicana, la II República contaba también con periódicos de oposición. Estos periódicos, que no aceptaron de buen grado la llegada de la República, pasaron de ser, según Sánchez Aranda y Carlos Barrera, puntos de referencia en el periodismo político para convertirse en oposición marginal²⁰. Entre ellos, destacan cabeceras como el monárquico *ABC*, que comenzó su trayectoria en 1903 y, en los años veinte, se convirtió en el diario más difundido de los matutinos madrileños. En la II República fue suspendido en varias ocasiones por ser el principal opositor del nuevo régimen. Durante el periodo republicano su director era Juan Ignacio Luca de Tena, que fue presidente del Consejo de Administración. Junto con *ABC*, *El*

¹⁹MELÉNDEZ MALAVÉ, N.; RAMOS LOZANO, M.^a P.; VERA BALANZA M.^a T.: “Ilusiones republicanas en la prensa local. El caso de dos periódicos malagueños en las vísperas de 1931”, en CHECA, A., ESPEJO, C., LANGA, C., VÁZQUEZ, M. (COORDS), *La comunicación durante la Segunda República y la Guerra Civil*. Madrid, Fragua, 2008, p. 254.

²⁰SÁNCHEZ ARANDA, J.J y BARRERA DEL BARRIO, C.: *Historia del periodismo español. Desde sus orígenes hasta 1975*, Pamplona, Euns, 1992, p.351.

Debate (1911-1936) se convirtió en el principal diario de la derecha española en el período republicano. Era un diario madrileño que pasó a ser el principal exponente, primero, de Acción Popular y, más tarde, de la CEDA. En los años veinte, era uno de los más leídos de Madrid y tuvo una difusión nacional. En el caso del también diario madrileño *Informaciones* (1922-1983), a pesar de las fluctuaciones ideológicas, al ser su director más duradero Juan Pujol, diputado de la CEDA y de tendencia monárquica, ésta fue la línea que más tiempo siguió. Llegó a tomar una orientación fascista en vísperas de la Guerra Civil y fue incautado por UGT durante la contienda. A *El Siglo Futuro* (1875-1936), su propietario, Juan Olazábal, y su director, Manuel Senante, le confirieron una estabilidad ideológica durante toda la República, siendo órgano central del integrismo. Fue un diario de baja venta que no superó los 5.000 ejemplares. En este grupo podemos incluir a *Ahora* (1930-1939), dirigido por su propietario Luis Montiel que, a diferencia del anterior, llegó a tener una tirada de más de 120.000 ejemplares, convirtiéndose en el principal rival de *ABC* en Madrid, dada su influencia, nivel y rectitud. En esta misma línea estaba *La Conquista del Estado* (1931). Fue un semanario madrileño fundado por Francisco Ledesma Ramos, en torno al cual se formó un grupo que, en octubre de 1931, daría lugar a las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS). Vinculado al nacimiento de Falange Española tenemos a *F.E.* (1933-1934), semanario de apenas ocho meses de vida que sólo llegó a publicar quince números. La corta trayectoria de *F.E.* estuvo relacionada con la unión de estos dos grupos políticos mencionados y la consecuente formación de Falange Española y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FE de las JONS), liderada por José Antonio Primo de Rivera, cuyo órgano oficial fue el semanario *Arriba* (1935-1979), ferviente defensor de un falangismo puro y, por tanto, contrario al nuevo régimen. Este periódico sucedió al único número de la revista *El Fascio*, ambas publicaciones fueron fundadas por el hijo del dictador. Obligado a desaparecer aquél por suspensión entre 1936 y 1939 llegó a convertirse en el periódico oficial del régimen franquista.

Los carlistas también contaron con periódicos desde el siglo XIX. En Navarra, por ejemplo, se expresaron a través de *El Pensamiento Navarro* (1897-1981), un órgano ortodoxo del carlismo que llegó a ser muy influyente durante la II República.

En cuanto a la representación de la clase obrera, lo primero que hemos de tener en cuenta es la variedad interna dentro de este sector social, lo cual no facilita tampoco

una aproximación a la realidad de la prensa en el periodo. Como afirma Santos Juliá, «los distintos sectores que componen esa variedad a la que conceptuamos como clase obrera, se manifiestan en órganos de expresión diferenciados y destinados, muchas veces, a reforzar la diferencia, a resaltar la propia identidad de grupo o de sector»²¹. En los años de la Restauración, este tipo de prensa representó, según Sánchez Aranda y Carlos Barrera, «un papel secundario» dentro del conjunto²². Con la llegada de la República, su situación mejoró considerablemente, sobre todo para los periódicos socialistas por la vinculación del Partido Socialista Obrero Español con el nuevo régimen. Así, dentro de la prensa obrera, tenemos, por un lado, a los periódicos anarquistas y comunistas. Representante de los primeros fue *Solidaridad Obrera* (1911-1939), diario de la CNT editado en Barcelona, que fue suspendido en numerosas ocasiones durante el periodo republicano. Sus problemas con el gobierno comenzaron casi desde la implantación del nuevo régimen²³. Se trató de un diario de venta muy baja y, sin embargo, muy leído. A pesar de tener una tirada nacional, el grueso de su publicación quedó reducida a Cataluña. Pese a la represión sufrida, el ímpetu de sus críticas al régimen republicano no disminuyó. En Madrid, nos encontramos con *CNT* (1932-1934), un periódico diario que surgió ante la falta de uno propio cenetista. Su trayectoria se truncó al ser víctima de la represión tras la fallida insurrección de octubre de 1934. También en esta línea ideológica estaba *La Tierra* (1930-1935), que comenzó siendo un «periódico de variedades»²⁴, pero, desde mayo de 1931, se convirtió en un diario que, aunque no estuvo vinculado directamente con la CNT, sí fue cercano a ella y llegó a ser órgano de la extrema izquierda en la capital. Su director fue Cánovas Cervantes, bajo cuyo gobierno este diario, que se autodefinía como «del pueblo», alcanzó cierta proyección. Junto a su cabecera, todos los días aparecía la siguiente leyenda: «*La Tierra* no es periódico de empresa. Está editado e inspirado únicamente por escritores libres»²⁵. *El Sindicalista* (1934-1939), bajo la dirección de Ángel Pestaña, fue primero semanario y, a partir de julio de 1936, se convirtió en diario asociado al Partido Sindicalista de aquél.

²¹JULIA, S.: «Prensa obrera en Madrid en los primeros años 30», en VVAA.: *Prensa obrera en Madrid 1855-1936*. Madrid, Índice, 1987, pp. 339-353, p. 341.

²²SÁNCHEZ ARANDA, J.J y BARRERA DEL BARRIO, C.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p.343.

²³CHECA GODOY, A.: *Prensa...*, op. cit., p. 285.

²⁴FONTECHA PEDRAZA, A.: «La tierra (1930-1935)», en VVAA: *Prensa obrera en Madrid 1855-1936*. Madrid, Índice, 1987, pp. 369-381, p. 370.

²⁵CHECA GODOY, A.: *Prensa...*, op. cit., p. 292.

La política del Partido Comunista desde el comienzo de la República fue de oposición frontal, algo que quedó reflejado en sus publicaciones. La prensa comunista estuvo representada por *Mundo Obrero* (1930-1939), que fue el órgano del PCE. Bajo la dirección de Vicente Uribe, sufrió numerosas suspensiones durante la II República y su máximo esplendor lo alcanzó durante la Guerra Civil. Señala Justino Sinova que, desde su aparición, *Mundo Obrero* estuvo más tiempo cerrado que en actividad²⁶. A pesar de su intento de recuperación en 1978, no duró mucho. Una de esas suspensiones intentó cubrirse con el lanzamiento de *La Lucha* (1934), periódico diario de muy corta duración ya que su cometido era claro. Con este mismo objetivo, nació *El Pueblo* (1934-1935), tras la suspensión de *Mundo Obrero* después la Revolución de Octubre de 1934.

Por otro lado, dentro de la considerada prensa representante de la clase obrera tenemos a la socialista. Estuvo presente en todo el territorio, aunque destacó en importancia la de Madrid. Un ejemplo fue *El Socialista* (1886-1939), que comenzó como semanario y, en 1913, se convirtió en diario. Fue órgano central del PSOE y durante la II República alcanzó su máxima difusión. En este periodo, destacó como director Julián Zugazagoitia. También fue víctima de los sucesos de la Revolución de Octubre, que le costaron una suspensión de catorce meses. *El Liberal* (1901-1937), diario de Bilbao, propiedad de Indalecio Prieto, tenía una orientación muy cercana al PSOE, y fue uno de los diarios vascos más difundidos en el periodo republicano. *Claridad* (1935-1939) fue diario desde febrero de 1936 y órgano del sector radical del PSOE. Estuvo vinculado a Largo Caballero, aunque no tuvo ventas altas. En Barcelona, la presencia socialista fue menor que en Madrid. Destacamos a *La Tribuna Socialista* que nació y murió en 1931; *Cataluña obrera*, un semanario que no consiguió ir más allá de su año de fundación, 1935; y *El Socialista*, en su edición catalana, que apareció y desapareció en 1934 por la citada revolución. Lo que sí tuvo el Partido Socialista fue una red de diarios provinciales muy importante.

En cuanto a la presencia de la prensa nacionalista, vinculada a los partidos de esta ideología, quedó prácticamente reducida a Cataluña y el País Vasco. A pesar de esto, afirma Checa Godoy que la Segunda República fue un período de intensa floración de la prensa en las nacionalidades²⁷. En Cataluña, la principal fuerza política era

²⁶SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa en la Segunda República Española. Historia de una libertad frustrada*, Barcelona, Debate, 2006, p. 282.

²⁷CHECA GODOY, A.: *Prensa...*, op. cit., p. 14.

Esquerra Republicana de Catalunya, cuyo órgano principal fue *L'Opinió* (1928-1934), semanario que fue también diario de Barcelona entre febrero de 1928 y abril de 1931. Su director principal fue Joaquín Ventalló. Aunque fue un diario de baja venta, llegó a ser muy influyente. En torno a esta publicación se formó un grupo de intelectuales y políticos muy relevante en los inicios de la República. *L'Humanitat* (1931-1939) era un diario vespertino impulsado por Lluís Companys que estará en la órbita del partido, llegando a ser órgano principal del mismo. Fue el diario catalán que consiguió más difusión, llegando a los 60.000 ejemplares al final de la República.

Además de Esquerra, cabe mencionar a la histórica Lliga Regionalista que, a partir de febrero de 1933, pasó a ser Lliga Catalana. También contó con un órgano propio como fue *La Veu de Catalunya* (1899-1979), diario matutino barcelonés que, a pesar de tener una venta que no superó los 40.000 ejemplares, tuvo una gran influencia en la opinión pública y fue el principal rival de *L'Opinió* durante el periodo republicano. En 1933, surgió *La Veu de Vespre* (1933-1934), como edición vespertina de *La Veu de Catalunya*, en apoyo de la Lliga. Por último, *L'Instant* (1935-1936), diario de Barcelona, sucedió al primero, el cual, tras el estallido de la Guerra Civil, adquirió una orientación cenetista. El partido Acció Catalana Republicana tuvo como órgano a *La Publicitat* (1878-1939), uno de los diarios más duraderos de Barcelona. Fue siempre republicano y pasó a editarse en catalán. También contó con *La Nau* (1927-1933), fundado por Antonio Rovira y Virgili. Éste fue, primero, un diario vespertino y pasó a ser matutino. Era afín a Esquerra, pero tuvo una importancia mucho menor que los citados hasta ahora.

Podemos destacar también en Cataluña a *El Be Negre*, (1931-1936). Surgió nada más proclamarse la República y llegó, bajo la dirección de José María Planes, a convertirse en «...el semanario catalán más popular de la época y probablemente también el más temido...»²⁸. Se trataba de un periódico satírico que, según Gómez Aparicio, «...arremetió contra todos, fuere cual fuere su adscripción política»²⁹. El fin de este semanario coincidió con el asesinato de su director a manos de pistoleros de la F.A.I.

²⁸SOLÁ, L.: *El Be Negre (1931-1936)*, Barcelona, Bruguera, 1967, en GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo español. De la dictadura a la Guerra Civil*. Madrid, Editora Nacional, 1981, p. 326.

²⁹GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 326.

Mientras tanto, en el País Vasco, la fuerte presencia de una prensa tradicionalista hizo que la importancia de la prensa nacionalista fuese menor. De entre las cabeceras existentes, las más importantes fueron las vinculadas al Partido Nacionalista Vasco. Así, *Euzkadi* (1913-1937) fue su principal órgano en los años de la República, momento en que se convirtió en uno de los más leídos, llegando a superar los 30.000 ejemplares. Este partido contó también con *La Tarde* (1914-1937), diario vespertino que compartió empresa editorial con el anterior, y *El Día* (1930-1936), diario de San Sebastián, heredero de *El País Vasco* (1923-1930), que llegó a ser un diario de prestigio y tirada considerable. En Vitoria, el apoyo al PNV quedó reducido al semanario *Bandera Vasca* (1932). En Navarra, el PNV contó con *La Voz de Navarra* (1922-1936). A pesar de la escasa implantación del partido en este territorio, su órgano estuvo operativo desde la Dictadura de Primo de Rivera y se mantuvo durante toda la República.

A este panorama periodístico, hemos de añadir aquella prensa que pretendía representar la institución militar. Fueron tres los periódicos que se definían a sí mismos como agentes periodísticos del Ejército, según Justino Sinova³⁰. Eran *La Correspondencia Militar* (1877-1932), diario madrileño que, durante la Segunda República, fue el más beligerante y antiguo de éstos; *Diario de la Marina*, desde 1901 y *Ejército y Armada*, fundado en 1905.

³⁰SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 195.

3. EL MARCO LEGAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA Y SU APLICACIÓN.

La Segunda República desarrolló su propia normativa sobre libertad de prensa, aunque en los primeros momentos, como veremos a continuación, se sirvió de la legislación anterior. Ahora analizaremos, por periodos, cuáles fueron las leyes que se aplicaron, cómo y por qué.

Fueron muchas las esperanzas puestas en el régimen republicano. Sus impulsores defendían la libertad de expresión, de prensa e imprenta, pero tuvieron que hacer auténticos malabares para intentar compaginar la estabilidad gubernamental con la libertad de expresión y el resultado fue una sucesión de medidas que pretendían contradecir las intenciones originales. Pese a todo, los gobernantes republicanos defendieron siempre la libertad, incluso en momentos en los que las suspensiones de periódicos eran la tónica habitual. En este sentido, autores como José Manuel Morales Tamaral defienden la existencia de una continuidad en las iniciativas legislativas desde 1917 a 1936, que, por tanto, abarcarían tres regímenes políticos distintos, la Restauración, la Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Según este autor, las medidas que emanaron de estos tres regímenes, por una parte, sometieron a un mayor control a la prensa y reforzaron la censura y, por otra, realizaron los primeros pasos para una propaganda activa desde el Estado³¹.

3.1. El Gobierno Provisional

Según Stanley Payne, el acceso al poder sin resistencia de los republicanos creó una situación revolucionaria. Además, la posibilidad de ejercerlo sin mediación de un proceso legal, puesto que no había Parlamento, proporcionó libertad para gobernar mediante decretos, y el gobierno terminó por cuidar más sus atribuciones que por reconocer los derechos y las libertades prometidos³².

³¹MORALES TAMARAL, JM.: “A la conquista de las masas. Los orígenes de la propaganda estatal en la España de entreguerras, 1917-1936”, en *Rúbrica contemporánea*, vol. 5, n.10, 2016, pp. 65-83.

³²PAYNE, S.: *La primera democracia española. La segunda República, 1931-1936*. Barcelona, Paidós, 1995, p. 56.

En un primer momento, el Gobierno Provisional se comprometió a defender la institución republicana, asentada bajo el principio de la no dominación³³, y poner más atención a la defensa de los derechos y libertades públicas. De hecho, una de las primeras medidas del gabinete provisional fue el decreto de amnistía del 14 de abril firmado por Niceto Alcalá-Zamora. En él se incluían los delitos de imprenta por haber sido «impulsados por el amor a la libertad y a la Patria»³⁴, de esta forma, todos los delitos políticos, sociales y de imprenta, fuera cual fuese el estado en que se encontrasen, quedaban, desde aquel momento, suspendidos. Pero según Carmen Martínez Pineda, esta medida, quizás, estaba velando la intención de exonerar a los propios miembros del Gobierno Provisional, entre ellos el propio Manuel Azaña y, una vez logrado este objetivo, se comenzó a tejer un entramado legal que permitiera controlar las publicaciones³⁵.

Poco después del decreto de amnistía, el día 17 de abril, Alcalá-Zamora firmó la derogación de la Ley de Jurisdicciones de 23 de marzo de 1906, bajo cuya vigencia la libertad de prensa estuvo muy limitada. Esta ley, dice Justino Sinova, «confiaba a la jurisdicción de Guerra el conocimiento de algunos delitos de injuria y calumnia, como los de desacato a las autoridades militares cometidos mediante la Imprenta y autorizaba para suspender una publicación cuando se hubieren dictado tres autos de procesamiento contra ellas»³⁶. Este autor afirma también que tanto la amnistía inicial como esta disposición eran decisiones «estimulantes» por parte del gobierno, pues infundían esperanza³⁷.

Como ya se ha mencionado, este primer Gobierno se sirvió, inicialmente, de leyes anteriores. De la Restauración, se mantuvo la Ley Provincial del 29 de agosto de 1882, que dotaba de un gran poder a los gobernadores civiles, otorgándoles la prerrogativa de imponer multas y alertar al ministro en caso de sanciones superiores. Asimismo, también se recuperó la Ley de Imprenta de 26 de julio de 1883 o Ley

³³Véase VIROLI, M.: *Republicanism*. Santander, Ediciones Universidad de Cantabria, 2014, p. 41.

³⁴*Decreto de Amnistía*. Archivo General de la Administración. Ministerio de Presidencia. Caja 51/10384. Exp.7, en MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada. La censura de prensa en la Segunda República*. Málaga, última línea, 2018, p. 25.

³⁵MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p. 25.

³⁶SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa en la Segunda República Española. Historia de una libertad frustrada*. Barcelona, Debate, 2006, p.32.

³⁷*Ibidem*, p. 32.

Gullón, publicada en la *Gaceta de Madrid*³⁸ el día 30 de ese mismo mes. Esta ley nació en el seno de un gobierno liberal y se inspiró en la Constitución de 1876 y en la ley de libertad de prensa francesa del 29 de julio de 1881. Quedaba recogida en ésta la libertad de información en su artículo trece, en que reconocía «el derecho de todo español de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta, o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa»³⁹. En esta ley, sólo se hacía referencia a la fundación de nuevos periódicos, algo que se facilitaba, y a su posible censura, que se confería a una sentencia ejecutoria y no a una decisión política, al derogar, en su momento, todas las leyes y disposiciones relativas a la imprenta anteriores a 1883⁴⁰. Con ello, se volvía a someter a los tribunales ordinarios los delitos que se cometieran a través de la imprenta o de cualquier otro procedimiento que implicara la difusión del pensamiento, para evitar actuaciones arbitrarias. También se exponían las normas por las que debían regirse las aclaraciones y rectificaciones. Fue ésta una medida que se sumó a ese sentimiento inicial de defensa de las libertades, ya que se trataba de la ley más liberal dictada en nuestro país hasta aquel momento, era una ley que se redujo a lo estrictamente necesario⁴¹, dejando fuera cualquier referencia a la censura. Por este motivo, dado que en la ley no se hablaba del contenido de las publicaciones sino de los trámites administrativos, se entendía que los castigos tampoco debían estar relacionados con lo publicado y, en cualquier caso, se establecía el derecho de apelación y rectificación y un plazo de ocho días para la prescripción de las infracciones⁴². El único requisito que imponía para la creación de un diario, recogido en su artículo 8º, fue el de comunicarlo a la autoridad gubernativa correspondiente cuatro días antes. Además, en los casos en los que un periódico fuese suspendido, sólo se requería para su reaparición la presencia de un nuevo representante de la empresa, de forma que el periódico pudiese retomar su actividad en un breve periodo de tiempo, reduciendo así las consecuencias económicas derivadas de la suspensión que pudieran acarrear para la empresa y sus trabajadores. Estuvo vigente hasta su derogación en

³⁸Se trata de una publicación periódica oficial editada en Madrid entre 1967 y 1936. Fue sustituida tras la Guerra Civil por el Boletín Oficial del Estado.

³⁹*Ley Gullón*. 26 de julio de 1883. En MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada. La censura de prensa en la Segunda República*. Málaga, última línea, 2018, p.23.

⁴⁰CENDÁN PAZOS, F.: *Historia del derecho español de prensa e imprenta (1502-1966)*. Madrid, Editora Nacional, 1974, p.151.

⁴¹GÓMEZ REINO Y CARNOTA, E.: “La libertad de expresión en la II República Española”, en *Gráfica internacional. Revista de derecho político*. Nº 12, 1981-1982, Madrid, pp.159-187, p.171.

⁴²SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa en la Segunda República Española. Historia de una libertad frustrada*. Barcelona, Debate, 2006, p. 41.

1966, pero, en realidad, en el periodo que nos atañe, la presencia de esta ley fue más testimonial que efectiva, y quedó, en la práctica, anulada. Además, por el poder que confería el Estatuto Jurídico, denominado decreto de plenos poderes, que veremos más adelante, unido a otras disposiciones que también analizaremos, esta ley no sólo quedaba inoperante sino que todo ello parecía incompatible con un régimen de libertad. Esta era la opinión de algunos contemporáneos, de hecho, y, una semana después de la proclamación de la República, el diario *ABC* publicó un editorial en el que tildaba al nuevo sistema de gobierno de dictadura:

“Un Gobierno que se ha nombrado a sí mismo, que se ha formado espontáneamente sobre una suposición de voluntad nacional, que se arroga la «plenitud de poderes» y no tiene responsabilidades inmediatamente exigibles, ninguna limitación legal de esos poderes..., es una dictadura típica, inconfundible... No importa el matiz ni la composición de esta dictadura; que no sea personal y que el pomposo nombre de República la incline a una moderación de su arbitrio; es dictadura. Y está por ver la moderación”⁴³.

Sí que se mantuvo la función del Ministro de la Gobernación⁴⁴, pues, en virtud de esta ley, nada innovadora a este respecto, la prensa entraba dentro de sus competencias durante toda la Segunda República. Este Ministerio se ocupaba del orden público, y el problema de la prensa era tratado como un problema de esta índole. El primer ocupante de este cargo fue Miguel Maura quién, en sus memorias, mostraba la dificultad que le entrañó ejercer dicha labor, ya que, según Stanley Payne, desde el comienzo, la República se sumió en una espiral de violencia, ante lo que el Ministro de Gobernación debía actuar⁴⁵. Sin embargo, y, ante la opinión pública, tanto el propio Maura como otros miembros del nuevo Gobierno, defendieron la tranquilidad con la que se había implantado el nuevo régimen, aunque, en la realidad, tuvieron que tomar medidas para controlar situaciones violentas y las críticas de los periódicos. Una de estas actuaciones durante este Gobierno fue el rescate de otra ley anterior, la denominada *Ley de Orden Público de 1870*, más restrictiva que la Ley Gullón, ya que permitía declarar dos estados de excepción: el de guerra y el de prevención. Esta

⁴³*ABC*, 22 de abril de 1931, editorial “Actos de dictadura”, en SINOVA, J.: *La prensa en la Segunda República Española. Historia de una libertad frustrada*. Barcelona, Debate, 2006, p. 47.

⁴⁴SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa....*, op.cit., p. 42.

⁴⁵PAYNE, S.: *La primera democracia española. La segunda República, 1931-1936*. Barcelona, Paidós, 1995, p.93.

disposición, heredada también de la Monarquía, posibilitaba, en virtud del estado de prevención, la suspensión de publicaciones por la implantación de medidas preventivas que, en el estado de guerra, serían aplicadas por el ejército⁴⁶. Con el mismo objetivo de garantizar el orden público, también se recurrió a la legislación de la Dictadura de Primo de Rivera, un periodo que, en lo que a prensa se refiere, destaca por la obsesión del dictador por vigilar y controlar a la prensa como un mecanismo de control de la opinión⁴⁷. De este régimen, se mantuvo el Estatuto del 20 de marzo de 1925⁴⁸, que daba a las localidades capacidad para desenvolverse por sí mismas, convirtiéndolas en sujetos de derecho público⁴⁹. De esta forma, las autoridades locales podían sancionar por sí mismas aquellos periódicos que considerasen estaban infringiendo la ley.

La primera medida legislativa emanada de este primer gobierno republicano fue el *Estatuto Jurídico* antes mencionado, publicado en *La Gaceta* el 15 de abril de 1931⁵⁰, en cuyo prólogo, el gobierno se definía como «de plenos poderes»⁵¹. Fue concebido como una norma constituyente por sus creadores y en unas circunstancias de cambio excepcionales. En su apartado 4º, se declaraba que su actividad se orientaría «no sólo en el acatamiento de la libertad personal y cuanto ha constituido en nuestro régimen constitucional el estatuto de los derechos ciudadanos, sino que aspira a ensancharlos, adoptando garantías de amparo para aquellos derechos...»⁵². Pero en su última disposición, el gobierno se autorizaba a sí mismo para someter esa libertad personal y los derechos ciudadanos que había prometido ampliar a un «régimen de fiscalización gubernativa»⁵³. El artículo aludido decía así:

“El Gobierno Provisional, en virtud de las razones que justifican la plenitud de su poder, incurriría en un verdadero delito si abandonase la República a quienes, desde fuertes posiciones seculares y prevalidos de sus medios,

⁴⁶DEL VALLE, J.A.: La censura gubernativa de prensa en España”, en *Revista de estudios políticos*, nº 21, 1981, pp. 73-126, p.76.

⁴⁷IGNACIO ROSPIR, J.I.: “La obsesión con la prensa y su censura: Primo de Rivera, 1923-1930”, en DE LA IGLESIA, C.: *La censura por dentro (1930)*, Madrid, Fragua, 2017, p.7.

⁴⁸SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 118.

⁴⁹ Gaceta de Madrid, 21 de marzo de 1925, nº 80, [on line]: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1925/080/A01446-01483.pdf>

⁵⁰FRANCISCO FUENTES, J., FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.: *Historia del periodismo Español*. Madrid, Síntesis, 1997, p.224.

⁵¹PAYNE, S.: *La primera democracia...*, op. cit., p. 54.

⁵²CENDÁN PAZOS, F.: *Historia del derecho español...*, op. cit., p.161.

⁵³SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p.33.

pueden dificultar su consolidación, en consecuencia, el Gobierno Provisional podrá someter temporalmente los derechos del párrafo cuarto a un régimen de fiscalización gubernativa, de cuyo uso dará asimismo cuenta circunstanciada a las Cortes Constituyentes”⁵⁴.

Al Estatuto Jurídico, se añadiría el 21 de octubre de 1931 la denominada *Ley de Defensa de la República*, también dictada en este primer gobierno. Menos de una semana había pasado desde la salida de Maura de la presidencia cuando vio la luz esta ley. El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, expuso sus intenciones desde el comienzo de su mandato cuando en el discurso de presentación de su gobierno a las Cortes declaró: «Nosotros haremos respetar la República (...) si no fuese respetada, el Gobierno la hará temer»⁵⁵.

En esta nueva ley, se calificaban como actos de agresión a la República la publicación de noticias que pudieran poner en tela de juicio la credibilidad de la misma o quebrantar, de algún modo, el orden social. Se trataba de una ley de excepción, con carácter constitucional, que debería haber sido derogada tras la aprobación de la Constitución, sin embargo, mantuvo su vigencia casi dos años y fue sustituida con la *Ley de Orden Público* de 1933 que veremos más adelante. Este carácter constitucional va a suponer una gran limitación de los derechos que, pocos meses después, quedaron recogidos en la Constitución. Las principales críticas contra ella se basaban en el enorme poder que concedía a los Gobernadores Civiles que, desde aquel momento, podían «suspender libremente el periódico que quisiera».⁵⁶ Azaña, para contrarrestar estas críticas señalaba que: «...sólo mirarán con recelo aquellos que tengan que temer algo de su aplicación (...) aquí no se habla de la prensa digna de este nombre, la prensa que vive a la luz del día, dentro de las leyes (...)»⁵⁷. Así defendió el presidente la aprobación de esta ley y, después, su continuidad tras la aprobación de la Constitución, asegurando que la prensa responsable no tenía nada que temer, sólo aquellos declarados enemigos.

⁵⁴ *Estatuto jurídico de la República* en GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo español. De la dictadura a la Guerra Civil*. Madrid, Editora Nacional, 1981, p. 54.

⁵⁵ AZAÑA, M.: “Una política” en *Obras Completas, II*, México, Oasis, 1968, p. 63. Citado en SINOVA, J.: *La Prensa...*, op. cit., p. 102.

⁵⁶ Diario de sesiones, 2 de octubre de 1931, núm. 59, pp. 36-37, en GÓMEZ REYNO Y CARNOTA, E.: “La libertad de expresión...”, op. cit., p. 176.

⁵⁷ SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 107.

En la preparación de esta ley hubo un proyecto previo presentado por Maura. Debido al temor del gobierno de no poder controlar al pueblo, se buscó una ley más restrictiva que la vigente hasta aquel momento, la Ley de Orden Público de 1870. Estaba inspirada en la *GesetzSchut der Republik*, Ley para la Defensa de la República de Weimar de 1922 y en la Ley de Defensa del Estado de Colombia⁵⁸. A pesar de las críticas que recibió este primer texto dentro del propio Gobierno⁵⁹, definido por su propio impulsor, Azaña, como un «instrumento jurídico de represión de la libertad de imprenta»⁶⁰, fue rescatado para su aprobación. Una vez en el puesto de presidente, Azaña decidió romper la discusión de la Constitución para proceder a la del proyecto de esta ley. Su preparación comenzó el día 15 de octubre. El nuevo presidente, contó con la colaboración de Santiago Casares Quiroga, amigo personal de él, que ocupó los cargos de Ministro de Marina primero y de Gobernación después, y del periodista Carlos Esplá. El día 19 fue leído ante el Consejo de Ministros. Debido a las críticas que recibió, Gonzalez Calleja asegura que Azaña resolvió la cuestión no admitiendo la consulta previa, y terminó consiguiendo la firma de Indalecio Prieto, que fue el único ministro del gabinete que se opuso directamente⁶¹. El día 20 y por boca de Azaña, que no permitió que fuese leída sino escuchada, los diputados conocieron esta ley sin posibilidad de reflexionar sobre ella. Tampoco se les permitió elaborar enmiendas en el trámite de urgencia que se adoptó para su aprobación⁶². Esta presentación, unido a que se trató de un procedimiento de urgencia, dio como resultado una discusión sobre la marcha, de forma rápida y, por tanto, muy pobre, según Justino Sinova. Mientras tanto, a la opinión pública, se la presentó como producto de un acuerdo pleno en el Gobierno⁶³. En lo que se refería a la prensa, la ley decía lo siguiente:

“Artículo primero— Son actos de agresión a la República, y quedan sometidos a la presente ley: I. La incitación a resistir o a desobedecer las leyes o las disposiciones legítimas de la Autoridad. — II. La incitación a la indisciplina o

⁵⁸ GONZALEZ CALLEJA, E.: *En nombre de la autoridad. La defensa del orden público durante la Segunda República Española (1931-1936)*. Granada, Comares, 2014, p.191.

⁵⁹ SEOANE, M.C. Y DOLORES SÁIZ, M.D.: *Historia del Periodismo en España. 3. El siglo XX: 1898-1936*, Madrid, Alianza, 1996, p. 404.

⁶⁰ AZAÑA, M.: *Memorias políticas y de guerra*, p. 93, en SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 124.

⁶¹ *Ibidem*, p. 191.

⁶² BALBÉ, M.: *Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1923)*, Madrid, Alianza universal, 1985, p.325.

⁶³ SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 103.

al antagonismo entre los Institutos armados o entre éstos y los organismos civiles. — III. La difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público. — IV. La comisión de actos de violencia contra personas, cosas o a cometerlos. — V. Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones y organismos del Estado. — VI. La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras.

Artículo segundo.—Podrán ser confinados o extrañados, por un periodo no superior al de vigencia de esta Ley, o multados hasta la cuantía máxima de 10.000 pesetas, ocupándose o suspendiéndose, según los casos, los medios que hayan utilizado para su realización: a) Los autores materiales o los inductores de hechos comprendidos en los números I al X del artículo anterior...”⁶⁴.

El artículo tercero facultaba al ministro de la Gobernación:

“II. Para clausurar los centros o Asociaciones que se considere incitan a la realización de actos comprendidos en el artículo primero de esta ley.

Artículo quinto.—Las medidas gubernativas reguladas en los precedentes artículos no serán obstáculo para la aplicación de las sanciones establecidas en las Leyes penales”⁶⁵.

En palabras de Justino Sinova, «la Ley de Defensa de la República era una ley de excepción muy dura, impropia de un sistema democrático por permitir la persecución de actos legítimos de opinión y por consagrar la arbitrariedad de la sanción gubernativa al margen de la tarea encomendada a los tribunales de justicia»⁶⁶. Por su parte, María Cruz Seoane y María Dolores Sáiz, consideran que ésta ley «supuso una grave cortapisa a la libertad de expresión...»⁶⁷. Manuel Balbé señala cómo esta ley fue usada para «desarrollar una política sectaria y autoritaria»⁶⁸. Según afirma Enrique Gómez-Reino y Carnota, al ser la prensa uno de los instrumentos más idóneos para atacar la institución

⁶⁴En: GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 68.

⁶⁵*Ibidem*.

⁶⁶SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p.112.

⁶⁷SEOANE, M.C. Y DOLORES SÁIZ, M.D.: *Historia del Periodismo en España...*, op. cit., p. 404.

⁶⁸BALBÉ, M.: *Orden público y militarismo en la España constitucional...*, op. cit., p. 335.

republicana, el objetivo de esta ley era armonizar libertad y respeto hacia la nueva forma de gobierno⁶⁹.

Para Stanley Payne, esta ley hacía peligrar los derechos civiles, no sólo por su contenido sino porque no había ninguna disposición dedicada a la apelación del encausamiento⁷⁰. Desde la prensa, las críticas fueron muy dispares. Cada periódico criticaba aquellos aspectos en los que se sentía atacado. Sin embargo, según Justino Sinova⁷¹, sí hubo unanimidad en la preocupación ante la falta de normas fijas y claras, motivo por el cual la mayoría de los directores de los diarios madrileños, tras reunirse en la Asociación de la Prensa el mismo día de la publicación de la ley en *La Gaceta*, el 22 de octubre, decidieron visitar al Presidente del Gobierno para solicitar una reglamentación de la ley que impidiera su aplicación arbitraria. Para la desazón de éstos, la única respuesta que obtuvieron fue que nada debían temer aquellos que se comportaran a satisfacción del Gobierno. A pesar de todas las críticas que recibió la ley, las penas impuestas al incumplimiento de esta norma fueron definidas desde el poder como leves, aunque se trataba de multas cuantiosas, ocupación o suspensión de los periódicos, así como el confinamiento de sus responsables por un tiempo no determinado, para aquellos supuestos en los que se hubieran cometido los «actos de agresión a la República», entre los cuáles se encuentra la apología del régimen monárquico⁷². Por esta razón, *ABC*, *La Época* y *La Gobernación*, por su carácter monárquico, fueron los que más vieron limitados sus intereses. *ABC* publicaba el 3 de febrero de 1932 lo siguiente:

“La censura (en los tiempos de la Dictadura) era una mutilación del periódico y de la libertad; se nos llevaba textos determinados, esta defensa elimina los temas enteros, cohibe toda nuestra libertad, y si no le sacrificamos toda nuestra lícita opinión, o no acertamos en la medida del sacrificio, nos trae la suspensión temporal o ilimitada, se nos lleva el periódico, todas las funciones del periódico en la vida social, cultural e industrial y destruye

⁶⁹ GÓMEZ-REINO Y CARNOTA.: *Aproximación Histórica al derecho de la imprenta y de la prensa en España (1480-1966)*. Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1977, p. 179.

⁷⁰ PAYNE, S.: *La primera democracia...*, op. cit., p. 94.

⁷¹ SINOVA, J.: *La prensa...*, op. cit., p.113

⁷² SINOVA, J.: *La prensa...*, op. cit., p.111.

intereses cuya pérdida es en algún caso pena enorme que ningún tribunal impondría por ningún delito de pluma”⁷³.

En efecto, una vez aprobada, la Ley de Defensa de la República dejaba pocas limitaciones al poder legal de la República para luchar contra lo que sus líderes consideraban sus enemigos⁷⁴. Uno de los principales problemas era la ya mencionada falta de precisión en los criterios para saber qué podía publicarse y qué no, dejando vía libre a actuaciones arbitrarias. Afirma Justino Sinova que, cuando las pautas de actuación son conocidas, la censura pierde eficacia de control y no puede actuar arbitrariamente⁷⁵. El ministro encargado de hacer cumplir esta disposición era el de Gobernación, al que ésta dotó de un gran poder. El período de vigencia de la misma coincidió prácticamente con la ocupación del cargo por Santiago Casares Quiroga quién comenzó su mandato con un gesto de buena voluntad, dando instrucciones para que reaparecieran los periódicos suspendidos en aquel momento. Fue un gesto fugaz, ya que a los pocos días se reanudaron las amonestaciones.

En el primer gabinete, se acordó también la redacción de una Constitución, por unas Cortes que fijaron su apertura para el 14 de julio, día de la Bastilla. La composición de estas Cortes, que resultaron de unas elecciones celebradas el 31 de mayo de 1931, bajo el amparo de una nueva ley electoral, del día 8 de ese mismo mes, que pretendía acabar con el viejo sistema de elecciones amañadas⁷⁶, provenía de las clases medias profesionales, que representaban el 81% de la Cámara. Estas nuevas Cortes, formaron un comité institucional presidido por Luis Jiménez de Asúa, catedrático de derecho y socialista moderado. Tras un arduo debate, la Constitución de la Segunda República Española fue finalmente aprobada, no exenta de crítica, por las Cortes el 9 de diciembre de ese año. En lo que respecta a la prensa, en virtud de su artículo 34, estableció la más amplia libertad de prensa e imprenta, declarando lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a previa censura.

⁷³Citado en GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 68.

⁷⁴PINO ABAD, M.: “Los delitos contra el orden público en el marco de la Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931”, en *AHDE*, 82, 2012, pp.743-759, p.748.

⁷⁵SINOVA, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 354.

⁷⁶PAYNE, S.: *La primera...*, op. cit., p. 65.

En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos, sino en virtud de mandamiento de juez competente.

No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme⁷⁷.

Vemos aquí cómo, en el primer párrafo, se garantiza la libertad de expresión a través de cualquier medio de difusión sin censura previa. Además, la suspensión de un periódico, en teoría, sólo podría hacerse por mandamiento de un juez competente. Fue un artículo difícilmente superable en lo que a libertades individuales se refiere, por este motivo, fue aprobado sin demasiada controversia⁷⁸. Sin embargo, si por algo destacaba este artículo es porque adolecía de una aplicación práctica, ya que en virtud de la disposición transitoria 2ª, que establecía el mantenimiento en vigor de la Ley de Defensa de la República (21 de octubre de 1931), quedaba, de *facto*, anulado. A pesar de quedar reconocida la libertad de expresión, Justino Sinova apunta que, en realidad, no existía en todo el texto constitucional un artículo dedicado a la libertad de imprenta, lo que le lleva a afirmar que, en la agenda de las reuniones de ese primer comité revolucionario no parecía haber espacio para este problema, a pesar de que muchos de sus integrantes estaban relacionados con este ámbito, como Indalecio Prieto y Alejandro Lerroux. Según el propio Sinova, sería por miedo a que esa libertad pudiese ser usada en contra de la propia República⁷⁹.

La vigencia del Estatuto, en teoría, debería haber acabado con la llegada de la Constitución, sin embargo, su trayectoria se dilató más de lo prometido, legitimando al Gobierno a tomar ciertas decisiones sin necesidad de aprobación en el Parlamento. De esto, unido al mantenimiento de la Ley de Defensa de la República, derivaron decisiones arbitrarias, muchas de las cuáles fueron destinadas a periódicos y periodistas. De hecho, pasó poco tiempo, tras la proclamación de la República, para que el Gobierno distinguiera entre la prensa amiga y la enemiga, aplicando a esta última el mismo rasero que a los ataques al sistema: la represión, castigo, condena y cierre de periódicos.

La aplicación de estas normas devino en la primera medida coercitiva del gabinete republicano: la suspensión de dos periódicos monárquicos, *ABC* y *El Debate*, y

⁷⁷CENDÁN PAZOS, F.: *Historia del derecho español...*, op. cit., pp. 177-178.

⁷⁸GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, E.: “La libertad de expresión...”, op. cit., pp. 161-164.

⁷⁹SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 143.

de un semanario comunista, *Mundo obrero*. Se trataba de tres publicaciones, consideradas de oposición, a las que se responsabilizó de la quema de conventos del 11 de mayo de 1931. Un día antes, en un contexto de celebración, se produjo un grave enfrentamiento entre republicanos y monárquicos, primero, junto a la sede del Círculo Monárquico y, después, junto al edificio de *ABC*. Se responsabilizó de estos hechos a su director, el Marqués de Ledesma. Estos acontecimientos fueron el antecedente inmediato de la quema de edificios religiosos por todo el país. Por su parte, el gobierno, ante su incapacidad para controlar la situación, decidió declarar la Ley marcial y sacar el ejército a la calle.

De estas tres suspensiones, *El Debate* fue el primero en reanudar su actividad, el 20 de mayo de 1931, y lo hizo con este editorial:

“No se nos dijo por qué se nos imponía tan grave sanción; ni siquiera nos fue notificada por escrito. Una orden telefónica, seca y sin razonar, fue considerada como suficiente para hacernos saber la suspensión acordada, con omisión de todo fundamento y aún sin expresar si el castigo habría de durar un día, una semana o un año. Conste nuestra firme protesta contra este acto arbitrario del Gobierno”⁸⁰.

ABC no sólo permaneció suspendido hasta el 5 de junio de 1931 sino que, además, su director, Juan Ignacio Luca de Tena, al ser considerado responsable de los hechos, fue encarcelado y juzgado, lo que tuvo consecuencias económicas graves para este periódico. En su vuelta a escena, *ABC* tituló su editorial «Decíamos ayer....», donde reproducía párrafos de publicaciones anteriores en los que declaraba su adhesión a la Monarquía parlamentaria, eso sí, mostrándose respetuoso con las instituciones vigentes⁸¹.

Resulta muy complicado conocer cuáles fueron exactamente los periódicos sancionados porque los actos sancionadores del gobierno no se publicaban en ningún boletín oficial⁸². Sí se conocen algunos casos a través de la prensa, pero las noticias que ocupaban la atención de los periodistas eran muchas y además eran muy prudentes, al

⁸⁰*El Debate*. N° 6807. 20 de mayo de 1931. “La suspensión de El Debate”. p.1., en MARTÍNEZ PINEDA, C.: *La prensa..., op. cit.*, p.29.

⁸¹*Ibidem.*, p. 29.

⁸²BALBÉ, M.: orden público y militarismo en la España constitucional..., *op. cit.*, p. 329.

menos al inicio, a la hora de publicar por miedo a posibles represalias. Así las cosas, las veces que se hacía mención a las sanciones se hacía de forma parcial⁸³. Sin embargo, sí se conocen muchos casos de suspensiones a través de distintas fuentes, no sólo por la publicación en los periódicos. Se conservan los recursos y dictámenes de muchas sanciones realizadas en el Archivo Histórico Nacional, y en el Archivo General de la Administración. Asimismo, existen otras vías indirectas de información, por ejemplo, existe un recuento incompleto, según Gómez Aparicio, pero muy útil de las sanciones derivadas de la aplicación de la Ley de Defensa de la República en dos libros de José Gutiérrez-Ravé⁸⁴. Otro medio de información lo obtenemos gracias a que, en el momento en el que la Ley de Defensa fue aprobada, el Ministro de Gobernación, Casares Quiroga, pidió un informe de la situación de los periódicos a los gobernadores civiles. En Vizcaya por ejemplo, la respuesta del gobernador civil decía así:

“Los periódicos que se hallan suspendidos en esta provincia son: *La Gaceta del Norte*, diario, y los semanarios *El Fusil*, *El Adelante*, *La Rivera Deportiva* y *El Trabajo*. Las causas que motivaron estas suspensiones fueron las furibundas campañas de todos ellos contra la República y los ministros de su Gobierno, llegando a excitar en sus escritos a la rebelión y a la desobediencia a las autoridades. A juicio del gobernador que suscribe no procede reanuden su publicación. No obstante, V.E. Con su elevado criterio adoptara la resolución que crea procedente”⁸⁵.

La crítica de actos políticos se convirtió en el motivo de la mayoría de las sanciones. Las autoridades, actuando en defensa de la imagen que los periodistas proyectaban del gobierno, vigilaban, multaban y suspendían publicaciones. Un ejemplo fue la multa de 1.000 pesetas al director de *La Voz del Pueblo*, Benjamín Caro Sánchez, por publicar un artículo titulado «El Bloque», donde denunciaba irregularidades en las elecciones. El periódico presentó un recurso y se le perdonó la mitad de la multa⁸⁶. El semanario católico *El Centro*, fue multado y suspendido en septiembre de 1931 tras un artículo en el que criticaba que se prohibiera a la prensa comentar el proyecto de Constitución, que fue interpretado como un agravio al régimen y a sus Cortes

⁸³SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 140.

⁸⁴GUTIÉRREZ-RAVÉ, J.: *España en 1931*. Madrid, Anuario, 1932; *España en 1932*. Madrid, Anuario, 1933, en GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 265.

⁸⁵*Ibidem.*, p. 116.

⁸⁶AGA, Interior, 44/70, 3 de julio de 1931 y 7 de septiembre de 1931, en SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 140.

Constituyentes. El día 24 de octubre, debido a una crítica a la escuela única, *El Defensor de Cuenca* fue multado con 500 pesetas⁸⁷. La veracidad e intención de una noticia era también objeto de vigilancia y control. En este caso, se otorgaba a los gobernadores civiles la autoridad para decidir qué noticias podían ser falsas, tendenciosas o mal intencionadas y actuar en consecuencia. A este respecto, *El Pensamiento Navarro*, un diario carlista de Pamplona, fue multado con 1.000 pesetas por publicar un artículo el 25 de junio de 1935 interpretado como derrotista y contrario a las elecciones y al régimen⁸⁸. El semanario pamplonés *La Esperanza* fue multado con 500 pesetas por unos artículos definidos por la autoridad como tendenciosos. Fue éste uno de los motivos por los que la trayectoria de esta publicación no pasó del año 31. El 21 de agosto de 1931, acusados de conspiración contra el régimen, fueron incautados numerosos periódicos tradicionalistas del norte, *Gaceta del Norte*, *Euzkadi*, *LaTarde* y el semanario *Adelante*. A éstos se sumaron algunos madrileños, como *Informaciones* y *Frente Único*, y otros de provincias como *La Hora* de Barcelona, *La Unión* de Sevilla o *El Tradicionalista* de Valencia. Al día siguiente, el 22 de agosto, el Gobernador Civil de Pamplona, sin esperar a la decisión de la fiscalía, arremetía de nuevo contra *El Pensamiento Navarro*, alegando que sus publicaciones eran un llamamiento a la rebeldía. Los ejemplares de ese día fueron incautados y poco después, el fiscal decretó la suspensión de la publicación⁸⁹.

Como hemos visto, la Ley de defensa de la República de 1931, condenaba la apología de la monarquía. Por este motivo, los periódicos se cuidaban de cumplir la ley. Para los declarados monárquicos, las precauciones tenían que reforzarse. Antes incluso de ser aprobada esta ley, en octubre de 1931, *El Noticiero Bilbaíno*, *El Nervión*, *Euzkadi* y *La Tarde*, fueron multados con 5.000 pesetas por publicar una esquila de Jaime de Borbón, al interpretarse esto desde el gobierno como un ataque a la República. Por este mismo motivo se impusieron multas también a *El Correo Catalán*, *Criterio* y *Tradición Vasca*. Si ser monárquico ponía a un periódico en el punto de mira, lo mismo ocurría con aquellos que se declararon católicos. También en el punto de mira estaba la prensa militar y, en octubre, *Ejército* y *Armada* fue suspendido 15 días por un artículo titulado «Sobre un Volcán», según Casares Quiroga, por su «tendencia derrotista»⁹⁰. Aplicando

⁸⁷GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 265.

⁸⁸AHN, Gobernación, leg.49A, n.º. 40, doc .nº 43, en SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 140.

⁸⁹MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., pp. 31-32.

⁹⁰ En SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p 201.

la ley de Defensa ya aprobada, el 21 de noviembre de 1931, el diario *ABC* fue sancionado con una multa de 1.000 pesetas y una suspensión de tres días. El motivo fue la publicación el día anterior de un artículo en el que, según interpretó el Gobierno, se menospreciaba al Parlamento por haber sancionado el acta de acusación contra don Alfonso de Borbón y Habsburgo. Pese al recurso interpuesto, el periódico dejó de publicarse los días 25, 26 y 27 de ese mes⁹¹.

3.2. El Primer Bienio:

Para este momento, ya se hacía notar el problema de comunicación que tenía la República debido, según Juan Francisco Fuentes y Javier Fernández Sebastián, por una parte a la actitud recelosa de Manuel Azaña hacia la prensa de todas las tendencias y, por otra, a un gobierno tan variado en composición que a menudo enviaba mensajes contradictorios⁹². En este primer bienio, que abarca de diciembre de 1931 a septiembre de 1933, una de las primeras preocupaciones de Azaña fue la de acabar con el poder del ejército en la política, para lo cual, decidió la clausura de la prensa denominada militar por su crítica constante al Gobierno. Para conseguir este objetivo, Azaña convino dejarla sin los fondos que recibía secretamente del Ministerio de la Guerra. Pese a los intentos del presidente por que esta ley fuese, al igual que la Ley de Defensa de la República, aprobada de forma inmediata, en este caso hubo de esperar dos semanas para ver su deseo materializado. Finalmente, el 2 de Marzo de 1932 se aprobó la Ley sobre la Prensa Militar con 177 votos a favor y 64 en contra. Azaña la definió como «un concepto político de lo que debe ser la actuación del ejército»⁹³, continuando con la política divisoria entre la buena y mala prensa. En esta ocasión, según Justino Sinova, la ley estaba fundamentada, dada la continua presencia y rastro del elemento militar en la política de la historia de España⁹⁴. De hecho, los temores de Azaña no parecen infundados si tenemos en cuenta que sólo cuatro meses después de aprobarse esta ley, un sector del ejército se levantó contra la República. Lo que el presidente pretendía era dar al ejército la función que le correspondía:

⁹¹GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 265.

⁹²FRANCISCO FUENTES, J., FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.: *Historia del periodismo Español*, Madrid, síntesis, 1997, p. 231.

⁹³ AZAÑA, M.: *Memorias políticas y de guerra*, en *Obras completas, II*, México, Oasis, 1968, en SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 203.

⁹⁴ SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 195.

“... Cada cual en su sitio; el Ejército a trabajar en los campos y en los cuarteles, y la oficialidad a interesarse por su profesión, por educar al soldado y por prepararse para la guerra. Del ejército se hablará, como de una institución del Estado, aquí y por quien tenga derecho y autoridad para hacerlo: por los señores diputados; pero nada más”⁹⁵.

Esta ley se componía de tan sólo tres artículos y, en el tercero de ellos, se establecía la prohibición de la denominada prensa militar, es decir, de toda publicación que manifestase o indujese a creer que representaba a la opinión de los institutos armados de la República, excepto de aquellas publicaciones aprobadas previamente por el Ministerio de la Guerra o de la Marina. Como es de suponer, esta ley afectó a los tres periódicos declarados militares, *La Correspondencia Militar*, *Ejército y Armada* y *Diario de la Marina*.

Otra medida interesante en lo que se refiere a la prensa fue la establecida por el artículo 5º de la ley del 25 de septiembre de 1932, por la que se aprobó el Estatuto de Cataluña. En el citado artículo, se concedía a la Generalitat la facultad de legislar sobre la prensa en el territorio que le competía⁹⁶.

Dado que toda medida legislativa quedaba reflejada en el Código Penal, es importante hacer referencia a la reforma del mismo del 27 de octubre de 1932. En lo que respecta a la prensa, el Código, en su artículo 11, incluía entre las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal «el hecho de realizar el delito por medio de la imprenta, litografía u otro medio que facilite la publicidad»⁹⁷. En el artículo 13, se consideraba responsable de la publicación al autor y, en su defecto y por este orden, a los directores de la publicación, editores e impresores.

En lo que a prensa se refiere, quedaba recogido en este Código que incurriría en pena de arresto mayor de un mes y un día y hasta seis meses los siguientes casos:

“1- Los autores, directores, editores o impresores de impresos que no tengan la autorización legal para cualquier tipo de publicación.

⁹⁵ SINOVA, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 205.

⁹⁶ SÁNCHEZ ARANDA, J.J y BARRERA DEL BARRIO, C.: *Historia del periodismo español. Desde sus orígenes hasta 1975*. Pamplona, Eunsa, 1992, p.327.

⁹⁷ CENDÁN PAZOS, F.: *Historia del derecho español...*, op. cit., pp. 164-167

2.- Aquellos que no den razón del director de una publicación a la autoridad gubernativa, ya sea una nueva publicación o debido a un cambio en la dirección de una existente.

3.- Quienes no presenten ante la autoridad gubernativa tres ejemplares de la publicación en virtud de la ley de imprenta”⁹⁸

En el Código, quedaban recogidas también penas de inhabilitación absoluta a los funcionarios que aplicasen la censura previa cuando las garantías constitucionales no estuviesen en suspenso y se recurría a un tratamiento especial de las faltas de imprenta. También imponía penas en forma de multa en los siguientes casos:

“1.- El director de un periódico que no rectifique una publicación falsa que pueda perjudicar a alguien en un periodo de no más de tres días.

2.- Aquellos que publiquen cuestiones privadas que perjudiquen a la familia de quien se refiera la publicación.

3.- Asimismo, aquellos que publiquen noticias falsas que puedan alterar de algún modo el orden público o perjudicar la imagen que el Estado proyecta.

4.- La apología de acciones calificadas por la Ley de delito así como la ofensa a la moral y las buenas costumbres serán castigados igualmente.

5.- Si alguien se adelanta a la publicación oficial de acuerdos o documentos del estado con malas intenciones tendrá también una pena”⁹⁹.

Cuatro meses faltaban para el cambio de gobierno cuando salió a la luz la *Ley de Orden Público* del día 28 de julio de 1933 y estuvo vigente hasta la Guerra Civil, coincidiendo pues con la nueva mayoría de centro-derecha vencedora de las elecciones de noviembre de 1933, de ahí que Justino Sinova hable de ella como «una ley de la izquierda que fue aplicada por la derecha¹⁰⁰». Su cometido era sustituir a la, hasta aquel momento vigente, Ley de Orden Público de 1870. Además, debido al uso abusivo de la Ley de Defensa de 1931, la *Ley de Orden Público* pretendía actualizar y suavizar a

⁹⁸ *Ibidem*.

⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁰ SINOVA, J.: *La prensa..., op. cit.*, p. 233.

ésta¹⁰¹, cuya aplicación, según apunta Carmen Martínez Pineda, no había logrado acabar con la violencia generalizada ni con las amenazas a la institución republicana¹⁰². Estos intentos de suavizar la legislación quedaban, en la práctica, truncados, al establecer la nueva ley tres supuestos en los que las competencias sancionadoras del gobierno se ampliaban. Eran los estados de prevención (Capítulo II/ título II), alarma (Capítulo III/ título II) y guerra (Capítulo IV/ título II). Esto suponía un cambio fundamental con respecto a la Ley de Orden Público de 1870, que sólo contemplaba dos. En el primer caso, el estado de prevención, no planteaba medidas que atacasen los derechos constitucionales, pero establecía la posibilidad de decretar el depósito previo de tres ejemplares de la edición del día dos horas antes de su publicación. Además, se imponían sanciones contra aquéllos que alterasen el orden público. Las multas podían oscilar entre las 5.000 y las 10.000 pesetas. El segundo caso, el estado de alarma, implicaba la suspensión del artículo 34 de la Constitución, posibilitando de este modo la censura previa y el secuestro y suspensión de publicaciones por parte de la autoridad gubernativa¹⁰³. En este caso, las multas podían ir desde las 10.000 hasta las 20.000 pesetas. En la última de estas situaciones excepcionales, el estado de guerra, se podían suspender prácticamente todas las garantías constitucionales, quedando bajo la autoridad militar las funciones antes asignadas al gobernador civil, entre ellas, la organización y aplicación de la censura. Con esta ley, la prensa vio muy limitado su radio de acción. Una parte de la oposición se reveló contra ella, pero, a la vista de los resultados, sus reclamaciones tuvieron poco éxito. Las mayores críticas y advertencias se destinaban a hacer ver al gobierno que, en el caso de que pasara a formar parte de la oposición, acabaría sufriendo las consecuencias de la misma. Así expresaba esta idea, Rollo Villanova:

“Vosotros, los que estáis en el Poder, debéis pensar que podéis pasar a la oposición y que esa ley... es un arma peligrosa para vosotros mismos”¹⁰⁴.

Esta predicción no tardó en cumplirse ya que, en noviembre de 1933, se produciría la llegada al poder del centro-derecha y la izquierda pasó a la oposición. Otro crítico a esta ley fue José Antonio Balbontín, diputado comunista, quien consideraba

¹⁰¹ FRANCISCO FUENTES, J., FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 227.

¹⁰² MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p. 75.

¹⁰³ CENDÁN PAZOS, F.: *Historia del derecho español...*, op. cit., p. 163.

¹⁰⁴ Recogido por SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit, p. 243

que, en virtud de ésta, los estados de prevención y alarma serían una situación habitual. Según María Rosa Abad Amorós,

“...no hay ley excepcional que se haya aplicado más intensa y frecuentemente que la Ley de Orden Público de 1933. Es más, se podría llegar a afirmar, que con la promulgación de esta Ley, España vivió bajo un casi constante estado de anormalidad constitucional”¹⁰⁵.

Durante este período según Justino Sinova¹⁰⁶, por norma general, las sanciones perseguían más asiduamente a la Prensa de derechas y a la izquierda radical (anarquista y comunista), aunque esto no significó que la prensa afín a este Gobierno estuviese libre de represalia. Esta situación desigual provocó críticas por parte de los afectados, Carmen Martínez Pineda¹⁰⁷, considera que la arbitrariedad fue siempre el rasgo más sobresaliente de la línea informativa del gobierno de coalición republicano-socialista, favorecido, como hemos visto, por la ausencia de un aparato oficial de censura que impusiera unas normas generales claras para todos. Entre estas críticas podemos citar a la de *La Tierra*, periódico filoanarquista, que hablaba sobre «la persecución de que son objeto los periódicos y periodistas de extrema izquierda, denunciados unos y encarcelados otros»¹⁰⁸. Hubo también una iniciativa para unir fuerzas, según Gómez Aparicio¹⁰⁹, contra la Ley de Defensa de la República (1931) y, en febrero de 1932, se constituyó la «Liga Defensora de la Libertad de Prensa», en la que participaron la mayor parte de los diarios madrileños procedentes de distintas ideologías, excepto algunos destacados como *El liberal*, *El Socialista* y *La Luz*. El plan de acción concertado consistió en una serie de conferencias divulgadoras. Según María Cruz Seoane y María Dolores Sainz¹¹⁰, la Liga quedó disuelta como consecuencia de los sucesos de agosto de 1932 cuando el día 10, el general Sanjurjo dio un golpe de estado. Como veremos, a consecuencia de éste, se dio una suspensión en masa de periódicos y la aportación de sus miembros más importantes quedó truncada. En octubre, su director, Mariano Marfil, redactor jefe de *La Época*, presentó su dimisión. Desde ese momento, el fin de este proyecto fue un hecho.

¹⁰⁵ ABAD AMORÓS, M.R.: “Estudio en torno a la Ley de Defensa de la República”, en *Revista de Ciencias de la Información*. Nº3, 1986, Universidad Complutense, Madrid, p.274.

¹⁰⁶ SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 120.

¹⁰⁷ MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p. 70.

¹⁰⁸ *La Tierra*, 1 de abril de 1932, en SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 287.

¹⁰⁹ GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 269.

¹¹⁰ SEOANE, M.C. Y DOLORES SÁIZ, M.D.: *Historia del Periodismo...*, op. cit, p.407.

El año 1932 comenzó con sanciones y, el 2 de enero, *Mundo Obrero* fue multado con 1.000 pesetas y suspendido durante 15 días por ataques a la Guardia Civil. El día 6, este periódico fue sancionado con un cierre de 10 meses. La edición de *El Debate* del día 7 fue secuestrada y el 19 de enero fue suspendido hasta marzo¹¹¹. El día 9 fue el turno de las ediciones de *Solidaridad Obrera* de Barcelona y de *La Gaceta del Norte* de Bilbao, que fueron secuestradas. También en enero de 1932, el gobernador de León multó al operador de cine de la ciudad de Sahagún por publicar en el diario conservador *La Mañana*, un artículo que, según él mismo expresaba, atentaba contra su autoridad. Pese a las críticas por parte de la Asociación de la Prensa hacia la actitud de los gobernadores civiles, las sanciones continuaron. Sólo en el mes de enero *Solidaridad Obrera* sufrió cuatro secuestros por las críticas ante lo que consideraban atropellos por parte de la autoridad. A consecuencia de éstas, el 21 de enero fue suspendido, al parecer, por haber sido encontradas en su imprenta hojas clandestinas y, al cerrarse la imprenta, el periódico no podía salir¹¹². Según Martínez Pineda, la política anticlerical de este primer bienio fue uno de los puntos candentes, en enero, *La Gaceta de Madrid* publicó el decreto de disolución de la Compañía de Jesús desencadenando serios recortes a la libertad de prensa¹¹³. A raíz de ello, *El Debate* fue suspendido indefinidamente, sanción que acabó el 26 de marzo. *El Día*, de Palencia, fue también sancionado el mismo mes de enero, en esta ocasión por publicar un artículo en el que pedía respeto al gobierno, que había decidido retirar imágenes y símbolos religiosos de las Escuelas Públicas. En febrero, debido a la publicación de los altercados resultados del retiro de un crucifijo en una escuela, *El Adelantado de Segovia* fue multado con 500 pesetas. También la mención a la masonería fue objeto de sanción. El 17 de febrero, el *Heraldo Alavés*, diario tradicionalista de Vitoria, fue multado por desvelar el nombre de algunos masones. La multa impuesta fue de 1.000 pesetas y provocó la agresión al director del diario por varias personas mencionadas en el artículo. En marzo, el semanario católico *El Ideal*, fue multado con 500 pesetas por un artículo titulado «Poncio Pilato», cuyo autor, José Giner, hacía una alusión a la persecución política que sufría la Iglesia. El gobernador vio en este artículo una falta de respeto a la autoridad competente. El artículo decía así:

¹¹¹ SÁNCHEZ ARA.J; BARRERA DEL BARRIO, C.: *Historia del periodismo español...*, p. 329.

¹¹² SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p.286

¹¹³ MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p. 69.

“Y en Medio de tanta injusticia y al resplandor de los templos llameantes se destaca la silueta de un Pilato más o menos materialista y sensualista, más o menos escéptico, y siempre «negando la obediencia a la ley divina y eterna, proclamados de la soberanía de la razón» — es decir, en forma de política liberal—, que reconoce siempre la inocencia De la Iglesia, pero que por razones de Estado la azota y La Corona de espinas y la entrega en manos de sus enemigos con escarnio de la libertad y de la justicia”¹¹⁴.

En virtud de la ley del 2 de marzo de 1932, por la que se prohibía la denominada prensa militar, el diario *La Correspondencia Militar* pasó a denominarse *La Correspondencia*. Si bien esta solución permitió la supervivencia del periódico por un tiempo, sin embargo, no consiguió impedir las numerosas sanciones y secuestros a los que se vio sometido. El 16 de abril fue represaliado con una multa de 10.000 pesetas tras serle aplicada la Ley de Defensa de la República, cuyo artículo segundo había infringido, según el Ministro de Gobernación. El 7 de julio, el Ministro Casares Quiroga volvió a suspender este diario indefinidamente y a multarlo con 10.000 pesetas, según parece, por haber incitado al ejército a intervenir en política¹¹⁵. Ésta sería la última sanción que recibió el periódico, pues no pudo sobrevivir a tan duros castigos. La ley del 2 de marzo provocó la desaparición de *Ejército y Armada*, siendo publicado su último número el 30 de marzo de 1932. Continuó hasta 1936 bajo otro nombre, *Marte*, que se convirtió en semanario poco después. También en virtud de esta ley, y nada más aprobarse la misma, desapareció *El Diario de la Marina*.

En abril, el diario *ABC* de Madrid fue denunciado por un artículo sobre «EL indulto de Casanellas», uno de los asesinos de Eduardo Dato. *El Imparcial*, también de Madrid, fue multado con 250 pesetas por un artículo sobre la situación del orden público, y, como hemos visto, este mismo mes, *La Correspondencia* fue multada con 10.000 pesetas. En mayo de 1932, *El Pueblo Católico* fue sancionado con 500 pesetas por informar sobre un mitin en el que participó D. Fernando de los Ríos en Granada, del cual, al parecer, tuvo que salir apresuradamente para «evitar ser linchado»¹¹⁶. Otro periódico sancionado en mayo fue *Solidaridad Obrera*, que, el día 23, fue denunciado y recogido, según señala Gómez Aparicio¹¹⁷. Junio fue un mes difícil para *ABC* ya que, el

¹¹⁴ En SINOVA GARRIDO, J.: *La Prensa...*, op. cit., p. 124.

¹¹⁵ *Ibidem*, p. 200.

¹¹⁶ MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p. 77.

¹¹⁷ GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 267.

día 15 su director, Marqués de Luca de Tena, fue procesado por la publicación de un artículo sobre el Estatuto de Cataluña y el día 28, recibió una denuncia por un artículo de José María Salaverría sobre «La Bandera».

Las incautaciones, suspensiones y multas fueron continuas en este primer bienio pero sin duda, el momento más conflictivo fue el verano de 1932, comenzando en agosto, en que se suspendieron cinco diarios madrileños: *La Correspondencia*, *El Imparcial*, *El Popular*, *El Mundo* y *Mundo Obrero*. El punto culminante de esta situación conflictiva fue la rebelión militar del día 10, también conocido como «La Sanjurjada»¹¹⁸. Tras el fracaso del golpe, el Gobierno se ensañó especialmente con la prensa de derechas, a la que aplicó la Ley de Defensa de la República. Existen, en función de los autores, variaciones en las cifras que representan los periódicos sancionados¹¹⁹, según la lista confeccionada por Gutiérrez-Ravé¹²⁰, ciento veintisiete periódicos quedaron suspendidos, 77 de los cuales eran diarios¹²¹. Esto suponía que casi

¹¹⁸ En la madrugada del 10 de agosto de 1932, el general Sanjurjo dio un golpe de estado. Se trató del primer levantamiento por parte de las Fuerzas Armadas contra la Segunda República. El golpe fracasó enseguida, pero las consecuencias se harán notar por más tiempo.

¹¹⁹ Carmen Martínez Pineda habla de entre 114 y 127 periódicos en MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p. 100.

¹²⁰ GUTIÉRREZ-RAVÉ.: *España en 1932. Anuario*, Madrid, 1933, en GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 298.

¹²¹ Los diarios, por provincias fueron según Gómez Aparicio: *El Heraldo Alavés*, de Vitoria; *El Diario de Albacete*, en Albacete; *El Día*, en Alicante; *La Gaceta de Levante*, de Alcoy; en Almería se suspendieron *La Independencia*, *El Diario de Almería* y *Heraldo de Almería*; en Ávila, *El Diario de Ávila*; de Baleares, *El Correo de Mallorca*; en Barcelona, *El correo Catalán*; de Burgos, *El Castellano*; Extremadura, diario de Cáceres; de Cádiz, *La Información* y *Nuestro Tiempo*; *El Diario de Jerez* y *El Guadalete*, de Jerez de la Frontera; *Regeneración*, de Ceuta; en Castellón se suspendieron *La Provincia Nueva* y *Diario de Castellón*; de Ciudad Real, *El Pueblo Manchego*; *El Defensor de Córdoba*, en Córdoba; de Gerona, *El Norte* y *Diario de Gerona*; *El Ideal*, en Granada; de Guipúzcoa, *La Constancia*, *Easo*, *La Prensa* y *La Noticia*; en Huelva, *El Diario de Huelva* quedó suspendido; en Jaén, *EL Pueblo Católico* y *La Mañana*; *La Provincia de Úbeda* y *El Día*, de Linares; en La Coruña, las suspensiones afectaron a *El Ideal Gallego*, *El Compostelano*, *Diario de Galicia* y *La Verdad*; en León, *El Diario de León*; *El Correo de Lérida*; en Logroño, *El Diario de La Rioja*; en Lugo, *La Voz de la Verdad*. Entre los afectados en Madrid, nuevamente nos encontramos con *ABC*, *El Debate*, *Informaciones*, *El Siglo Futuro*, *La Nación* y *Diario Universal*, sin embargo, *La Época*, logró escapar esta vez gracias, según señala Gómez Aparicio, a su director; en Murcia, *La Verdad*, *el Eco de Cartagena* y *Cartagena nueva*; *La Tradición Navarra*, *El Pensamiento Navarro* y *El Diario de Navarra*, todos ellos diarios de Navarra; de Orense, *La Región*; y *Región* también, pero de Oviedo; en Palencia *El Día de Palencia*; en Pontevedra, *El Diario de Pontevedra*; tampoco escapó de la suspensión *El Diario Montañés*, de Santander; ni *La Gaceta Regional*, de Salamanca; de Segovia, *El Adelantado de Segovia*; en Sevilla, *ABC*, *El Correo de Andalucía* y *La Unión*; en Tarragona, fueron *La Cruz* y *Correo de Tortosa* los afectados; de Teruel, *Acción*; en Toledo, *El Castellano*; de Valencia, *Las Provincias* y *Diario de Valencia*; en Valladolid, *Diario Regional*; *La Gaceta del Norte* y *Diario Vasco*, de Vizcaya y, para terminar con esta larga lista de diarios suspendidos, en Zamora tenemos a *Heraldo de Zamora*, *El Ideal Agrario* y *El Correo de Zamora*.

la mitad de los periódicos que se editaban en España dejaron de hacerlo por un tiempo. Además de todas estas publicaciones diarias, otros muchos semanarios quedaron afectados por estas medidas. En Madrid, por ejemplo, tenemos a *Blanco y Negro* o *Acción Española*. Como consecuencia, quedaron suspendidas en agosto de 1932 un total de 133 publicaciones¹²². Este control gubernamental no se detuvo en la prensa, también a las agencias informativas se les impuso la previa censura. Esta situación continuó durante varios meses pese a los intentos y recursos interpuestos a la autoridad. Según afirma Justino Sinova, el gobierno habría cerrado estos periódicos sólo por ser de ideología conservadora, católica o monárquica, lo que hacía sospechar que pudiesen haber participado en el levantamiento, aunque no hubiese pruebas de tales acusaciones¹²³. El levantamiento de las suspensiones fue lento y gradual, comenzando con las publicaciones provinciales, lo que el autor mencionado define como «una táctica de goteo»¹²⁴. *El Debate* regresó el 8 de octubre de 1932. Fue el primero en reaparecer de entre los principales diarios conservadores madrileños¹²⁵. *La Nación* hubo de aguardar hasta el 21 de octubre, fecha en la que publicó lo siguiente:

“LA NACIÓN, a la que no se le había aplicado ni el más leve correctivo desde que se proclamó la República, porque para hacerlo era menester declarar ilegales ideas que en ningún país civilizado lo son, no escapó a la medida. Hoy, a los setenta y dos días de incomunicación con el público, el Gobierno se digna permitir que volvamos al disfrute de nuestra propiedad y nuevamente al ejercicio de los más rudimentarios derechos de ciudadanía. Esperamos que también nos permitirá preguntar por qué nos privó de ellos...”¹²⁶.

ABC, sin embargo, tuvo que esperar al 29 de noviembre para reanudar su actividad tras 110 días suspendido y una lluvia de protestas contra la decisión del Gobierno.

¹²²Todas las publicaciones suspendidas han sido recogidas por GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 300.

¹²³SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 212.

¹²⁴SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 223.

¹²⁵MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p. 101.

¹²⁶*La Nación*. Nº 2131. 21 de octubre de 1932. “Breve historia de una etapa de silencio”. p.1., en MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p. 101.

En diciembre de 1932, *La Unión*, diario tradicionalista de Sevilla, fue sancionado con la multa máxima que contemplaba la ley, 10.000 pesetas, según el gobernador, por infringir la ley de Defensa de la República al menospreciar las instituciones del Estado. Esta misma cantidad le fue impuesta en febrero de 1933 a *Mundo Obrero* y, nuevamente en junio a *La Unión*. El 17 de Marzo de ese año, *Diario de Albacete* recibió una multa de 500 pesetas por recordar el tercer aniversario de la muerte del dictador Primo de Rivera. En abril, el diario *Hoy*, fue multado con 500 pesetas por publicar que el edificio del Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos de Madrid había sido desalojado para dedicarlo a una escuela de magisterio, destacando que, desde ese momento, los acogidos en él se habían quedado sin albergue. Esto fue interpretado por el gobernador civil como una noticia «falsa y tendenciosa»¹²⁷. En *La Información* del 12 de mayo de 1933, salía publicado un artículo en el que se recordaba el segundo aniversario de la quema de conventos. El gobernador impuso sendas multas de 500 pesetas al autor, José María Pemán, y al director Antonio Garrachón Cuesta. Según Justino Sinova¹²⁸, se trataba de un artículo de gran calidad que carecía de insultos al régimen, comenzaba así:

“Ahora va a hacer dos años. Fue el 12 de mayo de 1931, cuando quemaron la República. Fue todo aquello un episodio españolísimo, lleno de tornadizo y caprichoso infantilismo. La República se les había venido a los republicanos a las manos, de un modo inesperado y súbito, con ese aire de premio gordo o de milagrería con que suelen advenir en España las grandes cosas. Se la habían encontrado ahí, una noche, metida en las babuchas, como un juguete de reyes. De Reyes Magos, se entiende”¹²⁹.

También por recordar la quema de conventos, el director de *Diario de Jerez*, fue sancionado con 500 pesetas. Ambos periódicos se libraron de las sanciones gracias a una amnistía dictada por el Gobierno de centro-derecha en mayo de 1934. En junio de 1933, el gobernador de Pamplona multó a *El Pensamiento Navarro* por publicar una información que, según él, pudo dar lugar a conflictos.

En cuanto a la aplicación de la ley de Orden Público de julio de 1933, aunque fue más utilizada por los gobiernos siguientes, dado que en éste sólo estuvo en vigor de

¹²⁷ SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 131.

¹²⁸ SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 128.

¹²⁹ *Ibidem*, p. 128.

agosto a noviembre de 1933, también se declararon estados de excepción. De hecho, según apunta Carmen Martínez Pineda, en los meses entre agosto y noviembre, «...las ciudades de mayor inestabilidad social apenas disfrutaron de exiguos paréntesis en los que reinase la normalidad constitucional»¹³⁰. Como ejemplos podemos citar el del 19 de agosto, en que el Presidente del Consejo de Ministros declaraba el estado de excepción en Sevilla, situación que se mantuvo hasta el 20 de octubre. También del día 6 al día 20 de octubre se declaró en Cataluña el estado de excepción. En conjunto, como consecuencia de esta ley, según apunta José Manuel Morales Tamara¹³¹, entre 1934 y 1936, se contaron tan sólo cincuenta y seis días con plenas libertades ciudadanas. Poco después, en noviembre, las elecciones dieron el poder al centro-derecha dando fin a este Primer Bienio.

3.3. El Segundo Bienio

Pese a los constantes intentos por hacerse con el control del orden público, la coalición republicano-socialista no consiguió mantener el orden. En noviembre de 1933, el resultado de las elecciones cogió al gobierno saliente por sorpresa. «El ejecutivo ni siquiera lo vislumbró...»¹³². Se había producido, como expresa Stanley Payne, un desplazamiento de la opinión pública hacia la derecha¹³³. Aunque, como señala Nigel Townson, esto no fue del todo correcto ya la izquierda obtuvo cerca de cien diputados; el centro, 177; la derecha no republicana, 152; y la derecha anti republicana 44. En cualquier caso, según este autor, el resultado fue un Parlamento sin mayoría¹³⁴. Roberto Villa García apunta cómo en estas elecciones se dio un gran salto en las costumbres políticas españolas, ya que los partidos usaron la propaganda para movilizar al electorado de todos los rincones del país¹³⁵. Este Segundo Bienio, conocido también

¹³⁰ MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p. 109.

¹³¹ MORALES TAMARAL, J.M.: “La propaganda de Estado en España, 1914-1936”, en NIÑO, A Y ROSPIR, J.I. (Eds.): *Democracia y control de la opinión pública en el periodo de entreguerras, 1919-1939*, Madrid, Polifemo, 2018, pp. 159-205, p.194.

¹³² SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 246.

¹³³ PAYNE, S.: *La primera...*, op. cit., p. 210.

¹³⁴ TOWNSON, N.: “El controvertido camino hacia la modernización: 1914-1936”, en ÁLVAREZ JUNCO, J y SHUBERT, A (eds.): *Nueva Historia de la España Contemporánea (1808-2018)*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018, pp. 128-158, p. 153.

¹³⁵ VILLA GARCÍA, R.: “Los límites de la democratización: elecciones en la Segunda República Española”, en ÁLVAREZ TARDÍO, M y DEL REY, F. (eds.): *El laberinto republicano. La democracia española y sus enemigos. (1931-1936)*, Barcelona, RBA, 2012, pp.191-291, p. 204.

como «Bienio Conservador» o «Bienio negro» por las Izquierdas ¹³⁶, abarcó desde esas elecciones de noviembre de 1933 hasta las celebradas en febrero de 1936. Si, como afirma Eduardo González Calleja, en el Primer Bienio, la aplicación de la Ley de Orden público y otras medidas restrictivas de las libertades minaron la credibilidad de la República como sistema democrático, la herencia legislativa para los gobiernos siguientes favoreció que, en este Segundo Bienio, se reforzaran las medidas de orden público y control social del Estado ¹³⁷.

El primer problema con el que tuvo que enfrentarse la República en este periodo fue el de formar un gobierno estable ya que los grupos que componían la nueva coalición representaban un tercio de los votos de la Cámara. En estas circunstancias, no es de extrañar que, en los dos años de funcionamiento de este gobierno, se dieran dos crisis a fondo y 23 cambios ministeriales. Según José Ángel González Muñiz, «No había habido en la historia parlamentaria de ningún país tantas crisis ministeriales en tan poco tiempo y con el mismo Parlamento» ¹³⁸. En lo que a prensa se refiere, en el Ministerio encargado de su control, el de Gobernación, se sucedieron seis ministros en esos dos años. Comenzó ocupando el cargo el independiente Manuel Rico Avello, seguido de Diego Martínez Barrio. Los siguientes en la lista fueron los radicales Rafael Salazar Alonso y Eloy Vaquero. Manuel Portela Valladares, también independiente, ejerció el cargo en dos ocasiones, en el quinto gobierno de Alejandro Lerroux y en los dos gobiernos que él presidió, que abarcaron de diciembre de 1935 a febrero de 1936. Para terminar, el último que ocupó el cargo en este periodo fue Joaquín de Pablo-Blanco Torres, del Partido Republicano Radical de Lerroux.

En este Bienio, ni el gobierno radical ni la coalición radical-cedista aprobaron una ley específica de control de la prensa pero, como afirma Carmen Martínez Pineda, todos los gobiernos que se fueron constituyendo en estos dos años aplicaron sistemáticamente la Ley de Orden Público de 1933 ¹³⁹. Hubo, sin embargo, algunas disposiciones que directa, o indirectamente, tuvieron relación con la prensa. En el verano de 1934, mediante dos decretos, del 19 de julio y del 2 de agosto, quedaba prohibido a los militares y marinos acudir a la prensa para asuntos del servicio o temas

¹³⁶ FRANCISCO FUENTES, J. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 239.

¹³⁷ GONZÁLEZ CALLEJA, E.: *En nombre de la autoridad...*, op. cit., pp. 221-224.

¹³⁸ GONZÁLEZ MUÑIZ, J.A.: *Problemas de la Segunda República*, Madrid, Júcar, 1974, p. 43.

¹³⁹ MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p. 113.

políticos, sindicales, asociativos o militares, excepto que lo hicieran desde un punto de vista científico y doctrinal. Asimismo, quedaba también prohibida «...la introducción y lectura de periódicos y revistas de tal naturaleza en los cuarteles, establecimientos o dependencias militares respectivamente»¹⁴⁰. La Orden Ministerial de 7 de julio de 1934 y el Decreto de 22 de junio de 1935, prohibían «... la venta y pregón de periódicos y revistas por grupos de personas o cuando tales actos pudieran constituir motivo de provocación, respectivamente»¹⁴¹. El 2 de noviembre de 1934, el Ministro de la Gobernación, dictó una disposición que establecía:

“En cada número no debe figurar más que un solo entrefiletes de Visado por la censura, de preferencia en el texto y sin que aparezca nunca en el sitio que señale la intervención de la censura. Quedan terminantemente prohibidos los blancos y machacados, y tampoco podrán ser sustituidas las tachas con puntos suspensivos ni entrefiletes de Visado por la censura. Las pruebas de estos entrefiletes deberán ser visadas por la censura”¹⁴².

La consecuencia de ésta orden fue un cambio en la morfología de las publicaciones. Se pretendía con esta medida borrar las huellas de la censura, tal y como denunciaba el diario *ABC* el 27 de noviembre de 1934:

“La censura no ha consentido nunca que el público se entere de sus normas, de la extensión y del alcance de sus operaciones, ha pretendido siempre dar la idea de que no hace nada; borra implacablemente las huellas de su acción y prohíbe los avisos e indicaciones, aun las más módicas y discretas, con que ellos periódicos deben excusar alguna vez las forzadas omisiones y los desperfectos de su confección”¹⁴³.

En cuanto a la regulación del oficio de periodista, podemos citar el Decreto de 29 de agosto de 1934 y la Orden de 16 de octubre de 1935, que se ocupaban de la situación de los corresponsales acreditados en España. Además, el 29 de enero de 1936, el Gobierno emitió una orden reguladora de la placa de identidad a los periodistas profesionales. Por otro lado y, seguramente en un intento por controlar y establecer unas

¹⁴⁰ CENDÁN PAZOS, F.: *Historia del derecho español...*, op. cit., p. 164.

¹⁴¹ *Ibidem*.

¹⁴² SEOANE, M.C. Y DOLORES SÁIZ, M.D.: *Historia del Periodismo...*, op. cit, p.407

¹⁴³ *ABC*. N° 9831.27 de noviembre de 1934. «La censura», p.1, en MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p.125.

líneas comunes y centralizadas de gestión y actuación, según Carmen Martínez Pineda¹⁴⁴, el 26 de octubre de 1935, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, daba oficialmente por finalizada la autonomía de que gozaba la Generalitat de Cataluña en materia de orden público desde el acuerdo del 8 de abril de 1934. A partir de entonces y hasta este decreto, la Generalitat ejecutaba en su territorio la legislación del Estado español sobre régimen de prensa, asociaciones, reuniones y espectáculos públicos.

Además, como culminación a todas estas medidas coercitivas, se presentó a Cortes un Proyecto de Ley de Prensa en febrero de 1935, con él, el gobierno radical-cedista pretendía regular «toda reproducción de ideas mediante signos, imágenes o sonidos, destinada al público y hecha por procedimientos mecánicos»¹⁴⁵. Esta ley, redactada en medio de una crisis ministerial, fue según Tuñón de Lara, impulsada por el gobierno más de derechas de la República¹⁴⁶. Uno de sus principales impulsores fue José María Gil Robles, el que fuera subdirector de *El Debate* y, desde mayo de 1935 encargado del Ministerio de la Guerra. Este proyecto se quedó en eso, un proyecto que nunca salió a la luz debido a la oposición de otros grupos políticos, incluso de las extremas derechas tal y como señalan María Cruz de Seoane y María Dolores Sáiz. Según estas autoras, Ramiro de Maeztu fue uno de sus pocos defensores¹⁴⁷. Además, como señala Gómez-Reino y Carnota, el clima de crisis social exigía poner en primera línea actuaciones dirigidas a acabar con esos problemas¹⁴⁸. Esta era precisamente la intención del proyecto, acabar con la influencia de los periódicos en este clima de agitación. Por eso, Gil Robles estaba convencido de que se trataba de una ley necesaria ya que, hasta el momento, se vivía «en un estado casi ininterrumpido de excepción», según sus propias palabras¹⁴⁹.

El objetivo primordial del proyecto de Ley de Imprenta era sustituir la ley Gullón de 1883, considerada muy liberal por el Gobierno del momento, que pretendía hacer una nueva ley a su medida. Esa fue la excusa que se utilizó ya que, como hemos visto, la ley Gullón no tuvo una aplicación real en este periodo. La razón principal,

¹⁴⁴ MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p. 131.

¹⁴⁵ SEOANE, M.C. Y DOLORES SÁIZ, M.D.: *Historia del Periodismo...*, op. cit., p.407

¹⁴⁶ En GÓMEZ REYNO Y CARNOTA, E.: “La libertad de expresión...”, op. cit., p. 165.

¹⁴⁷ *Ibidem*, p. 406.

¹⁴⁸ GÓMEZ REYNO Y CARNOTA, E.: “La libertad de expresión...”, op. cit., p. 165

¹⁴⁹ SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 375.

argumentaba Gil Robles, era que se responsabilizaba a los periódicos de la revuelta minera asturiana de octubre de 1934¹⁵⁰. El 6 de febrero de 1935, el entonces Ministro de la Gobernación, Eloy Vaquero, leyó el preámbulo de este proyecto de Ley de Publicidad:

“El [principio] de la libertad para emitir ideas u opiniones valiéndose de cualquier medio de difusión, que reconoce el artículo 34 de nuestro Código constitucional, es vigorosamente respetado en el proyecto; pero al mismo tiempo, y por ello mismo, se crea un sistema eficaz de responsabilidad que frene los abusos y coarte las ilegítimas demasías en un orden de actividades en el que cada vez aparecen más graves los daños causados por la infracción, impune casi siempre, del derecho privado y el social”¹⁵¹.

En este proyecto de ley, por primera vez se establecía una configuración específica de la empresa periodística¹⁵², uno de cuyos objetivos era conocer la identidad del propietario. Se permitiría la previa censura y la publicación de comunicaciones oficiosas por parte del gobierno, al que sólo se imponía la condición de hacer públicas las normas a las que debía ajustarse la censura, algo novedoso que atendía a una de las principales críticas recibidas. Decía así el artículo 14:

“El Gobierno podrá establecer la previa censura de periódicos, folletos, hojas sueltas, carteles y demás impresos en los casos que le autorizan y con las condiciones que le imponen la Constitución y la ley de Orden Público”¹⁵³.

Fue una ley a la que se opusieron numerosas voces, desde el resto de grupos políticos, hasta los propios periódicos, que lo hicieron por unanimidad, excepto, en un primer momento, *El Debate*. Las críticas se centraban en lo que consideraban un ataque a la Constitución, ya que entendían que coartaba la libertad de expresión. Además, atentaba contra el propio artículo 34 de ésta, que sólo permitía la suspensión de periódicos por sentencia firme. Para este caso, se pretendía crear un tribunal de prensa que decretara suspensiones. Ésta fue la principal novedad de la modificación de la ley cuando, en mayo, se formó el segundo gobierno radical-cedista. La creación de ese

¹⁵⁰*Ibidem*, p. 363.

¹⁵¹GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 424.

¹⁵²GÓMEZ REYNO Y CARNOTA, E.: “La libertad de expresión...”, op. cit., p. 167.

¹⁵³En SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 365.

tribunal rompía también con el artículo 95, que establecía el principio de unidad jurisdiccional.

Es significativa esta unanimidad entre la prensa, ya que resultaba muy complicado lograr poner de acuerdo a fuerzas tan dispares, algo que resaltaba el diario *El Sol*:

“Que coincidamos en un punto nosotros, ABC, La Época, El pueblo y todos los demás periódicos de derecha, izquierda y centro es tan extraordinario que sin duda dará lugar a que nuestros gobernantes mediten serenamente sus propósitos”¹⁵⁴.

En palabras de Justino Sinova, la intención de los redactores era loable, pues querían poner orden a esta cuestión dando entrada al sistema judicial y limitando la discrecionalidad de las autoridades políticas. Se trataba de poner fin a los abusos. El problema era, según señala el citado autor, que, para conseguir esto, se le concedió al gobierno mucho poder, poniendo en grave riesgo la vida de los periódicos, ya que capacitaba a aquél para implantar la censura previa cuando lo considerase necesario¹⁵⁵. Esta prerrogativa era denunciada por *ABC* ya el día 6 de febrero de 1935:

“... Ley que, después de consignar y aumentar copiosamente las responsabilidades de la Prensa y los procedimientos más eficaces para exigirlos, establece la censura previa como recurso normal del Gobierno”¹⁵⁶.

Además, se criticó el establecimiento de la responsabilidad en cascada del autor, director, propietario y dueño de la imprenta con una concreción poco establecida previamente, sujeta a percepciones, como se puede ver en el artículo 18 de esta ley:

“Los que publicarán hechos falsos, de los que pueda resultar algún peligro para el orden público o dañen a los intereses o al crédito del Estado o de sus organismos, o reprodujeran documentos oficiales sin la debida autorización, comprometiendo la seguridad o el prestigio del Estado o los intereses de la economía nacional, y los que hicieren la apología de estos delitos o la de los delincuentes... serán castigados con la pena de prisión menor en su grado

¹⁵⁴ La ley de prensa y los periódicos, el sol, 7 de febrero de 1935, en SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 369.

¹⁵⁵ *Ibidem*, p. 364.

¹⁵⁶ En GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 424.

medio y prisión mayor en su grado mínimo y multa de 2.500 a 10.000 pesetas”¹⁵⁷.

Se denunciaba también que la ley iba encaminada a acabar con las pequeñas publicaciones o aquéllas que eran contrarias al gobierno.

Finalmente y a pesar de las modificaciones a las que fue sometida, esta ley no llegó a ser aprobada en el Congreso de Diputados. El 6 de junio se celebró la última sesión parlamentaria sin que el proyecto recibiera el visto bueno. Ante este fracasado intento, el Gobierno acometió un nuevo proyecto para terminar con los abusos de la prensa. Se trató, según Gómez Aparicio, de un renovado intento por someter esos abusos a las leyes penales¹⁵⁸. Era una reforma del Código Penal que incluía nuevas normas de procedimiento para los delitos que se cometiesen a través de la imprenta o de otras formas de publicidad. El proyecto fue presentado por el ministro de Justicia y Trabajo, Federico Salmón Amorín, el 13 de noviembre de 1935, pero no pudo completar los escalones necesarios para salir a la luz antes de la caída del Gobierno y el triunfo del Frente Popular.

La inestabilidad política y social favoreció que, en este Bienio Negro, el gobierno usara «... todo este arsenal de medidas...»¹⁵⁹. Nada más comenzar el gobierno de Lerroux, la Ley de Orden Público de 1933 fue utilizada para supervisar la producción periodística. Según Martínez Pineda¹⁶⁰, este afán controlador inicial se debió al intento de tapar cualquier crítica de la prensa al resultado electoral. Pero no se quedó en el comienzo del período, la vigilancia a la que la prensa estuvo sometida en este Bienio fue constante y, según María Cruz de Seoane y María Dolores Sáiz, la libertad de la prensa se vio mucho más constreñida que en el Primer Bienio¹⁶¹. Aunque, como apunta Justino Sinova, en este momento se trató con más tolerancia a la prensa de derechas, la censura casi permanente afectó a todos por igual¹⁶². Una excepción a esto podría ser la prensa comunista ya que, tal y como apunta Gómez Aparicio, «... el recelo y desafección con que la generalidad de la opinión pública miraba al Comunismo determinaron el escaso

¹⁵⁷ En SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p.367.

¹⁵⁸ GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 425.

¹⁵⁹ GÓMEZ REYNO Y CARNOTA, E.: “Aproximación histórica...”, op. cit., p.184.

¹⁶⁰ *Ibidem*, p. 114.

¹⁶¹ SEOANE, M.C. Y DOLORES SÁIZ, M.D.: *Historia del Periodismo...*, op. cit, p.407.

¹⁶² SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 120.

éxito de sus publicaciones, contempladas con una manifiesta indiferencia»¹⁶³. El gobierno exigía el depósito previo a los periódicos con antelación suficiente para poder inspeccionar las publicaciones. Las medidas usadas hasta este momento, multas, suspensiones y secuestros de periódicos, siguieron practicándose con la misma intensidad que en los periodos precedentes. La novedad venía dada por la Ley de Orden Público de 1933, que posibilitaba el endurecimiento del control político de la prensa con la declaración de estados de excepción. No había pasado un mes desde el cambio de gobierno cuando fue impuesta la censura previa al declarar el estado de alarma en diciembre de 1933 y, nuevamente, en marzo de 1934. En teoría, el hecho de declarar el estado de alarma no legitimaba la censura, pero el gobierno terminó imponiéndose. Como consecuencia del primer estado de alarma, *Solidaridad Obrera*, sufrió un cierre que se prolongó hasta el 10 de abril. *Mundo obrero* sufrió también una suspensión, nada más cambiar el gobierno, que se prolongó hasta el 2 de enero. A raíz de una huelga general de Artes Gráficas en Madrid que provocó el paro total en los talleres de prensa Española el 1 marzo de 1934, el diario *La Lucha*, fue suspendido desde ese mes, también el semanario *Renovación*. A consecuencia de esta huelga, *ABC* no pudo aparecer durante 13 días y, cuando lo hizo, tuvo que recurrir a personal ajeno para sustituir a los huelguistas¹⁶⁴. Veremos las consecuencias que tuvieron estos hechos durante el gobierno del Frente Popular.

Sin duda, el momento más complicado del periodo fue el provocado por la Revolución de Octubre de 1934. El levantamiento fue, según Martínez Pineda, resultado de la precariedad laboral, que a su vez radicalizó a los mineros asturianos, y de la inestabilidad política¹⁶⁵. Nigel Townson apunta que el detonante de esta huelga revolucionaria socialista fue la entrada de tres miembros de la CEDA en el gobierno¹⁶⁶. En cualquier caso, a consecuencia de ésta, el día 7 de octubre aparecía en *La Gaceta de Madrid* la decisión gubernamental de declarar el estado de guerra en todo el país. Esta situación se prolongó casi cuatro meses y, en el caso de Asturias, no se levantó hasta el 22 de enero de 1935. A partir de ese momento, la aplicación y organización de la censura de prensa recaía en el aparato militar. En ese tiempo, todas las cabeceras debían presentar dos ejemplares de la edición del día ante la autoridad militar hasta una hora

¹⁶³ GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 378.

¹⁶⁴ SÁNCHEZ ARANDA, J.J y BARRERA DEL BARRIO, C.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p.353.

¹⁶⁵ MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p. 135.

¹⁶⁶ TOWNSON, N.: "El controvertido camino hacia la modernización...", op. cit., p.153.

antes de su publicación. Tras la revolución, numerosos periódicos obreros, republicanos de izquierda y nacionalistas catalanes fueron suspendidos por mucho tiempo y toda la prensa fue sometida a censura previa durante quince meses, hasta enero de 1936. Alcalá Zamora suspendió entonces el estado de excepción para que se celebrase sin censura la campaña electoral de los comicios de 1936.

De entre los afectados por estas suspensiones derivadas de la revolución de octubre, destaca la sufrida por *Mundo obrero*, que permaneció cerrado desde ese mes hasta el 2 de enero de 1935. También *Solidaridad Obrera* fue víctima de esta situación y estuvo cerrado hasta el 16 de enero de 1935. Otro de los afectados fue, nuevamente, el semanario socialista *Renovación. El Socialista* fue, también por este motivo, suspendido indefinidamente y no pudo reaparecer hasta el 18 de diciembre de 1935, catorce meses y medio después. *El Sol* y el *Heraldo de Madrid* permanecieron cerrados nueve días, desde el 5 de octubre y *La Tierra*, otros diez. Igual suerte corrió *La Libertad* que, a su vuelta, calificaba el movimiento revolucionario como «la más tremenda sacudida que ha conocido esta República»¹⁶⁷. Al diario *Ahora*, le tocó esperar 11 días para volver al público.

La represión fue mayor que en agosto de 1932 y, según Checa Godoy, representó «la otra cara de la moneda respecto al 10 de agosto»¹⁶⁸. De hecho, en ese periodo de tiempo, sólo los periódicos derechistas recibieron autorización para circular. En Madrid, únicamente pudieron publicarse los números de *El Debate*, *ABC*, *La Nación*, *La Época*, *Informaciones* y *El Siglo futuro*. Ante esta situación, el diario monárquico *La Nación* denunciaba que las suspensiones no eran responsabilidad del gobierno, sino que los periódicos mismos se la habían impuesto para «mantener la alarma» y fomentar la revolución¹⁶⁹. Resulta muy complicado determinar el número de periódicos que fueron realmente suspendidos y cuáles estaban apoyando la huelga. Gómez Aparicio, que realizó una lista muy detallada para agosto de 1932, para este episodio sólo cita algunos casos aislados¹⁷⁰. Checa Godoy, habla de «...toda la prensa socialista, comunista y libertaria, así como la vinculada a la Esquerra Republicana de

¹⁶⁷ *La Libertad*, 14 de octubre de 1934, en SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., pp. 322-323.

¹⁶⁸ CHECA GODOY, A.: *Prensa ...*, op. cit., p. 14.

¹⁶⁹ En SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 323.

¹⁷⁰ GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo...*, op. cit., pp. 409-420.

Catalunya y muchos periódicos republicanos de izquierda»¹⁷¹. Según Juan Francisco Fuentes y Javier Fernández Sebastián, habrían sido sancionadas con la suspensión las principales cabeceras republicanas, obreras y catalanistas¹⁷². Tampoco Justino Sinova¹⁷³ o María Cruz Seoane y María Dolores Sáiz¹⁷⁴ dan cifras concretas. En cualquier caso, a la luz de las publicaciones que efectivamente salieron a la calle, podemos hacernos una idea de la magnitud de las consecuencias. Según Nigel Townson, octubre del 34 fue «un punto de inflexión porque el clima que se generó terminó polarizando la política y sus consecuencias posteriores, como veremos, lo convirtieron en punto de referencia hasta el estallido de la Guerra Civil»¹⁷⁵.

Las numerosas crisis de gobierno sufridas por la coalición de derechas intensificaron la censura y el control de la prensa. El 30 de noviembre de 1934, el gobernador civil de Madrid decidió castigar con la suspensión automática al *Diario de Avisos*. Esta decisión fue comunicada al director del periódico mediante un telegrama en el que no explicaba los motivos. Decía así:

“En uso de las facultades que me han sido delegadas por la autoridad militar y utilizando las conferidas en la Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933, he acordado suspender indefinidamente la publicación de ese periódico de su dirección”¹⁷⁶.

En marzo de 1935, *El Pueblo*, que había surgido como órgano del partido socialista mientras durase la suspensión de *El Socialista*, fue también obligado a parar su producción. *Arriba*, semanario falangista, estuvo gubernativamente suspendido desde julio a octubre de 1935 por un artículo titulado «Falsedad», en el que criticaba las concentraciones celebradas por la C.E.D.A. en Medina del Campo y en el estadio valenciano de Mestalla. Al final de este gobierno, el ejecutivo cuidaba mucho de impedir que las crisis dentro del mismo salieran a la luz, por ello, *El Debate* y *El Siglo futuro* fueron multados con la cantidad de 10.000 pesetas. De esta infracción sólo se conoce la comunicación que el Gabinete de Censura hizo circular en Madrid:

¹⁷¹ CHECA GODOY, A.: *Prensa ...*, op. cit., p. 14.

¹⁷² FRANCISCO FUENTES, J., FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 235.

¹⁷³ SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., pp. 319-340.

¹⁷⁴ SEOANE, M.C. Y DOLORES SÁIZ, M.D.: *Historia del Periodismo...*, op. cit., p. 407.

¹⁷⁵ TOWNSON, N.: “El controvertido camino...”, op. cit., p. 154.

¹⁷⁶ En MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p. 182.

“Por haber publicado los periódicos *El Debate* y *El Siglo Futuro*, en parte de sus ediciones, originales relacionados con la última crisis que habían sido intervenidos por la censura, el jefe del Gobierno ha impuesto a cada uno de los mencionados diarios una multa de 10.000 pesetas”¹⁷⁷.

También el diario *Región* de Oviedo fue multado en enero de 1936 por desobedecer a los parámetros de la censura.

Finalmente, el 7 de enero fueron convocadas las elecciones para el mes siguiente y el entonces Ministro de Gobernación, Portela Valladares, decidió el cese del estado de excepción en toda España, tras más de dos años de vigencia de alguna de sus variantes. La prensa «disfrutó» desde entonces de un total de cuarenta días para publicar sin censura. Las elecciones se convocaron para el 16 de febrero y, éstas, dieron el poder a las fuerzas republicanas de izquierdas. Como consecuencia de esta convocatoria, se dio un florecimiento de las publicaciones, sobre todo procedentes de la izquierda, que había quedado debilitada durante el bienio anterior y se esforzaba ahora por dotarse de medios de comunicación y difusión de sus ideas. Se trató de un intento por «reequilibrar ese panorama tan adverso de 1935»¹⁷⁸. Surgieron así el semanario *Política* (azañista), *Claridad* (socialista-caballerista) y *Democracia* (socialista-besteirista).

3.4. El Gobierno del Frente Popular

En enero de 1935, Indalecio Prieto y Manuel Azaña alcanzaron un acuerdo para retomar su antigua alianza. Un año después, el 15 de enero de 1936, el Frente Popular quedó formado bajo el liderazgo del segundo. A esta coalición se suscribieron representantes de ocho fuerzas sociales y políticas, pues las elecciones generales de febrero de 1936, como señala Nigel Townson, estuvieron muy reñidas¹⁷⁹. Las elecciones dieron el poder al Frente Popular pero, ante la falta de apoyos por parte de las organizaciones obreras, se formó un «Gobierno débil de republicanos de izquierdas», que dio lugar a que se sucedieran cuatro equipos de gobierno durante el periodo¹⁸⁰. En el Ministerio de Gobernación fueron dos políticos los que ocuparon el

¹⁷⁷ *Informaciones*, 1 de enero de 1936, en SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 383.

¹⁷⁸ CHECA GODOY, A.: *Prensa ...*, op. cit., p. 14.

¹⁷⁹ TOWNSON, N.: “El controvertido camino...”, op. cit., p. 155.

¹⁸⁰ *Ibidem*, p. 155.

cargo, Amós Salvador y Juan Moles. También Santiago Casares Quiroga ocupó el cargo unos días con una interinidad.

Durante este gobierno, la cuestión del orden público fue, según María Cruz Mina, lo que centró el debate político¹⁸¹. Una de las primeras decisiones del nuevo ejecutivo fue la declaración de amnistía a los miles de represaliados tras la Revolución de Octubre. Mediante un decreto de 29 de febrero de 1936, el gobierno obligaba a las empresas a readmitir a «todos los obreros, empleados o agentes que hubieran despedido por sus ideas o con motivo de huelgas políticas, a partir del 1 de enero de 1934»¹⁸². También obligaba a indemnizarles por el tiempo que permanecieron despedidos. Este tipo de decisiones tuvieron consecuencias económicas y personales muy graves para algunos periódicos, ya que llevaban implícita la obligación de despedir a aquéllos que habían sido contratados para suplir a los huelguistas. A consecuencia de esta decisión, Juan Ignacio Luca de Tena dimitió de su cargo de director de *ABC*. Lo mismo le ocurrió a Juan Pujol, rector de *Informaciones*, que en una carta a los lectores expresaba, de este modo, sus motivos:

“Han tenido que dejar su trabajo los hombres honrados y laboriosos que han compartido conmigo la tarea cotidiana cerca de año y medio en horas difíciles para el país y para el periódico... Un día, en una comida que tuvimos juntos, les dije que mientras yo tuviera la dirección de este periódico, no se apartarían de mi lado. Y es claro que no pudiendo resistir a la fuerza coactiva del Gobierno, no tenía más que un medio, y lo acepto, de cumplirles mi palabra: dejar de ser director de *Informaciones* el mismo día en que ellos dejan de ganar su pan aquí”¹⁸³.

Por otro lado, el día 17 de febrero, el Gobierno del Frente Popular impuso nuevamente la previa censura al declarar el estado de excepción, situación que se prolongó cinco meses. Según Justino Sinova, esta decisión fue tomada por temor a que se produjera «una explosión política» tras el resultado de las elecciones¹⁸⁴. Por medio de otra disposición de finales de febrero, el Ministro de Marina dictó una orden-circular en

¹⁸¹ CRUZ MINA, M.: “*ABC en la preparación ideológica del 18 de julio*”, en TUÑÓN DE LARA, M (dir.): *Comunicación, cultura y política durante la II República y la Guerra Civil, Tomo II. España (1931-1939)*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2008, pp. 11-34, p.27.

¹⁸² En SEOANE, M.C. Y DOLORES SÁIZ, M.D.: *Historia del Periodismo...*, op. cit, p. 452.

¹⁸³ *Informaciones*, 2 de marzo de 1936, en SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p.393.

¹⁸⁴ SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 387.

la que prohibía, en los lugares de descanso de la marinería y en las cámaras de jefes y oficiales, los periódicos que él consideraba estaban fuera del marco constitucional, es decir, los monárquicos. En marzo, al ilegalizar la Falange, se cerró su órgano periodístico, *Arriba*¹⁸⁵. Al final del periodo, cuando los rumores de un levantamiento armado eran cada vez más sonoros, el gobierno emitió una circular, del 23 de mayo de 1936, en la que se decía que los debates parlamentarios podían publicarse ya que eran la única sección de los periódicos no sometida a censura. Decía así:

“En la reproducción de los debates parlamentarios la censura permitirá la publicación de todo lo que se consigne en el Diario de Sesiones”¹⁸⁶.

Esta circunstancia fue aprovechada por la prensa para dar toda la información posible a sus lectores.

Hubo también un proyecto para establecer un cuerpo oficial de censores profesionales en cada delegación provincial, debido a las omisiones, en la práctica, de la censura en las provincias, mientras que la prensa nacional estaba sometida a una vigilancia mucho más escrupulosa. De este intento fallido se hizo eco el número 6200, correspondiente al 26 de junio de 1936, de *El Día*¹⁸⁷.

Este período fue el único momento en el que la prensa de extrema izquierda pudo actuar sin ser objeto de persecución política constante. Hubo, según Checa Godoy, un auge de la prensa extrema que, al igual que ocurrió con la sociedad, se radicalizó¹⁸⁸. Dicen Juan Francisco Fuentes y Javier Fernández Sebastián que, «la adscripción política de cada medio hacía que se pusiera el acento en una u otra forma de desorden social»¹⁸⁹. La gran víctima, por otro lado, fue la prensa derechista, sobre la que se produjo, además de la censura, una oleada de violencia y asaltos, llegando al ensañamiento, en el caso de la prensa católica. Según Gómez Aparicio, estos acontecimientos, que recoge en su obra, eran una manifestación del júbilo con el que se recibió el triunfo electoral del

¹⁸⁵ SÁNCHEZ ARANDA, J.J y BARRERA DEL BARRIO, C.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 329.

¹⁸⁶ AGA. Ministerio de Interior. Caja 44/2416, en MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p. 218.

¹⁸⁷ En MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p. 213.

¹⁸⁸ CHECA GODOY, A.: *Prensa ...*, op. cit., p. 14.

¹⁸⁹ FRANCISCO FUENTES, J., FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.: *Historia del periodismo...*, op. cit., p. 239.

Frente Popular¹⁹⁰. En Alicante, el 20 de febrero, el edificio de *Más*, órgano de la CEDA alicantina, fue asaltado e incendiado y quedó completamente destruido. También en Alicante sufrieron daños el diario católico *Día*, que hubo de parar de trabajar hasta el 2 de abril, y *Diario de Alicante*, de cuya caja de caudales desaparecieron 39.000 pesetas. En Murcia, el mismo día, el 20 de febrero, fueron atacados *La verdad*, cuyas máquinas quedaron destrozadas y *Levante Agrario*, cuyo propietario cedió lo que pudo ser salvado a los trabajadores para que trabajasen por su cuenta a partir de aquel momento. En Málaga hubo un intento de asalto a *La Unión Mercantil* y, en Pontevedra, el *Diario de Pontevedra* fue apedreado. El 10 de marzo, el *Ideal* de Granada fue quemado por completo ante la pasividad de los bomberos. A consecuencia de este incidente, el diario no pudo reaparecer hasta el 23 de junio. Mejor suerte corrió *La Voz de Asturias* que, tras dos intentos, las fuerzas del orden lograron evitar su quema. El 22 de febrero, *El Faro de Ceuta* desapareció entre llamas. Ese mismo día, en Jaén, *La Mañana* fue aplastado y su maquinaria destruida. En marzo, el intento de asalto al *Diario de Navarra* dejó un conteo de diez heridos y dos muertos. El día 13 de marzo, fue el turno del diario madrileño *La Nación*, que quedó reducido a escombros. Ese mismo día, *ABC* y *Siglo Futuro* lograron escapar a la destrucción. El *Diario de La Rioja*, de Logroño, fue asaltado e incendiado. A pesar de sufrir grandes daños pudo volver a aparecer, aunque compuesto a mano. En *El Correo Catalán*, también se produjeron daños importantes así como en el *Diario de Albacete*. En abril, continuaron los atentados de este tipo sufridos por *El Correo de Lleida*, *El Guadalete*, de Jerez de la Frontera, así como el *Diario de Jerez* y *Claridad*, que sufrieron graves daños.

Efectivamente, las demostraciones de efusividad tornadas en movimientos violentos se extendieron a lo largo del país. Aunque la mayoría de estos ataques no salían publicados por la acción de la censura, muchos estuvieron fomentados por la prensa. El 18 de febrero, *El Socialista* publicó en primera página: «¡otra vez la República!»¹⁹¹, mostrando que, para él, un gobierno de la derecha no era un gobierno republicano. Las dificultades para controlar estas situaciones debieron ser bien visibles ya que, en *El Heraldo de Madrid* del 17 de febrero de 1936, aparecía una nota de la Casa del Pueblo de Madrid, en la que se aconsejaba serenidad a los trabajadores¹⁹². Por

¹⁹⁰ GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo...*, op. cit., pp. 449-459.

¹⁹¹ En SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 387.

¹⁹² *Ibidem*, p. 387.

esta razón, como hemos visto, el gobierno decidió declarar el estado de alarma, que se concretaba en la censura previa y en el límite al derecho de reunión. En algunas partes del territorio nacional, se declaró también el estado de guerra. Según señala Justino Sinova¹⁹³, bajo el mandato del Frente Popular hasta el estallido de la Guerra Civil, el estado de alarma fue permanente. Esto, para periódicos y periodistas, implicaba la imposibilidad de dar información acerca de sucesos políticos, enfrentamientos y atentados que se sucedían en todo el territorio nacional. Sin embargo, sí hubo insinuaciones al respecto, *La Época*, en un artículo del 12 de marzo titulado «Acerca de las provocaciones» resaltaba cómo «una consigna cerrada y cumplida con celo por la Prensa Revolucionaria» le obligaba a «poner sobre el más o menos forzado vacío de información el rótulo que atribuye cuanto se calla a maniobras y provocaciones de los reaccionarios»¹⁹⁴. También *La Época* o *ABC* sugerían la existencia de la censura. Incluso en las páginas de *El Socialista*, pese a pertenecer su partido, el PSOE, al Frente Popular, se veían los efectos de la censura:

“Si el Gobierno Azaña solicita un crédito de discreción obligada a los fines de la política del Frente Popular, ¿cómo podemos negárselo? Ello no implica complacencia, sino sacrificio. Y después de dos años de sentirnos amordazados, francamente no es demasiado que se nos pida aguantar unas semanas más”¹⁹⁵.

No era necesario que la acción de la censura estuviera explícitamente escrita, era aún más frecuente que ésta se manifestara mediante tachones, huecos en blanco y el letrero «Visado por la censura».

Quizás y, paradójicamente, debido a este clima de tensión y violencia generalizada, el ejecutivo no recurrió a suspensiones masivas, como en períodos precedentes. La censura era tal que se acababa con el problema antes de que fuera publicado. Sin embargo, según Carmen Martínez Pineda, los métodos no fueron más severos que en etapas anteriores en que, según la autora, los gobernadores civiles fueron más puntillosos. De hecho, asevera que, mientras en el período anterior las huellas de la censura estaban prohibidas mediante decreto, durante el gobierno del Frente Popular, la

¹⁹³*Ibidem*, p. 389.

¹⁹⁴*Ibidem*, p. 393.

¹⁹⁵*El socialista*, 13 de marzo de 1936, en SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., p. 394.

aparición de huecos en blanco y tachones fue continua¹⁹⁶. Aunque sí hubo algunas suspensiones, no las conocemos todas, como es de suponer, debido, en parte, al filtro de la censura. Tampoco se produjeron secuestros políticos. Justino Sinova ha recogido las siguientes sanciones¹⁹⁷: indirectamente, se conoce la suspensión de *Odiel* de Huelva porque el ministro comunicó el 28 de febrero que se levantaba tal castigo; hay también constancia de multas impuestas a *El Debate* y *Siglo Futuro*; también fue sancionado con 2.000 pesetas *El Diario Vasco* de San Sebastián aunque, según la edición de *ABC* del 17 de abril de 1937, se desconocen las causas; el día 30, en *El Siglo Futuro*, se publicó una reseña en la que se informaba de una multa de 5.000 pesetas impuesta a *La Unión* de Sevilla, según el gobernador, por injurias al presidente de la República; el *Socialista*, el 18 de mayo, informaba sobre una multa a *La Época* por valor de 5.000 pesetas por «publicar unos textos que la censura había prohibido».

Si en un primer momento, los periódicos afines a la política del Frente Popular disfrutaron de una mayor libertad, la censura se fue robusteciendo y el gobierno empezó a no distinguir entre amigos y enemigos. Tanto fue así que, señala Martínez Pineda, en mayo, una tercera parte de muchas páginas estaba intervenida por la censura¹⁹⁸.

Un punto de inflexión en el periodo fue el atentado contra la tribuna presidencial en el quinto aniversario de la República. En consecuencia, los esfuerzos por controlar la censura se redoblaron con el fin de quitar importancia al suceso. Otro acontecimiento decisivo fue el asesinato de Calvo Sotelo la noche del domingo 12 de julio de 1936. La reacción inmediata del Ministerio de Gobernación fue la de prohibir la publicación de este hecho más allá de una referencia a la «muerte» y no al «asesinato» del diputado de la derecha radical. Esta disposición no fue acatada por el diario *Ya* y, como respuesta, fue suspendido. Lo que provocó la ira del Ministerio fue el hecho de haber mencionado en el artículo a las fuerzas del orden como responsables del homicidio. *Ya*, no pudo aparecer de nuevo hasta después de la Guerra Civil. Sin embargo, *La Vanguardia* publicó esos mismos hechos y no fue represaliada por ello. No fue ésta la única diferencia que se estableció entre las publicaciones. Martínez Pineda señala cómo las diferencias entre la naturaleza de las publicaciones llevaron al Ministro de la Gobernación a enviar la circular número 100, en la que prohibía «la publicación de

¹⁹⁶MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p. 197.

¹⁹⁷SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa...*, op. cit., pp. 397-402.

¹⁹⁸MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada...*, op. cit., p. 201.

noticias sobre hallazgos de armas y toda clase de noticias alarmistas», amenazando con castigos en caso de incumplimiento de esta orden¹⁹⁹. Investigaciones recientes muestran que, en el período de vigencia de este gobierno se cometieron alrededor de cuatrocientos asesinatos políticos y, según Nigel Townson, el de Calvo Sotelo «fue el catalizador para que se iniciara la rebelión militar que estaba preparándose desde las elecciones generales»²⁰⁰. Los rumores de un levantamiento militar recrudecieron aún más el seguimiento de la prensa. En tales circunstancias, las cabeceras optaron por informar sobre los debates parlamentario,s que según María Cruz Seoane y María Dolores Sáiz, era:

“La única sección no sometida a censura... [en consecuencia], los líderes derechistas utilizaron (...) los debates parlamentarios para dirigirse a la opinión pública, presentando con tintes apocalípticos los conflictos de orden público, que sus periódicos se encargaban de airear”²⁰¹.

Todos estos intentos por controlar el orden público no fueron suficientes y, finalmente, los rumores de la preparación de un golpe militar se tornaron reales el 18 de julio de 1936. A partir de ese momento, el panorama periodístico español sufrió una transformación radical²⁰².

¹⁹⁹*Ibidem*.

²⁰⁰TOWNSON, N.: “El controvertido camino...”, *op.cit.*, p.156.

²⁰¹SEOANE, M.C. Y DOLORES SÁIZ, M.D.: *Historia del Periodismo...*, *op. cit.*, p.407.

²⁰²CHECA GODOY, A.: *Prensa ...*, *op. cit.*, p. 14.

4. CONCLUSIÓN

Cuando hablamos de prensa y opinión pública durante la Segunda República española, lo primero a tener en cuenta es la falta de fuentes existentes, que impiden un estudio más minucioso, sobre todo en lo que a la aplicación efectiva de las leyes se refiere. En los últimos años, el interés por estos temas ha ido creciendo y contamos con una serie de obras que nos ayudan a acercarnos a la realidad. Sin embargo, en ellas se puede observar una cierta actitud crítica con los gobiernos republicanos en España. Como indicamos en la introducción de este trabajo, hay autores que ponen en tela de juicio la libertad de expresión en la Segunda República, como Balbé, también Martínez Pineda en su obra, cuyo título es bastante representativo, *Libertad secuestrada. La censura de prensa en la Segunda República*, o Justino Sinova en *La prensa en la Segunda República Española. Historia de una libertad frustrada*. Las obras de Gómez Aparicio o Checa Godoy, aunque se muestran más neutrales, no están exentas de crítica ante las medidas legislativas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos republicanos y su aplicación. Morales de Tamaral habla de una línea de continuidad en lo que se refiere al uso de medidas limitativas a la libertad de expresión en la Segunda República con respecto a la Restauración y la Dictadura de Primo de Rivera²⁰³. Quizás, uno de los pocos que consideran a este periodo como el de más libertad en la Historia de la España Contemporánea es Galo Hernández. Este autor, pone de relieve la difícil situación a la que tuvieron que enfrentarse los distintos gobiernos de la República y las formas a su alcance para el mantenimiento, no sólo del orden público sino también del propio régimen. Además, apunta, que la aplicación de esta normativa no fue tan estricta, salvo momentos puntuales y de forma temporal con la implantación de estados de excepción.

Como ya se ha señalado, en este momento estaríamos hablando de la sociedad de las masas, fue una etapa de cambios profundos en el orden social y la Segunda República se presenta como un paréntesis democrático que daba más oportunidades para la movilización y la protesta²⁰⁴. En estas circunstancias, el intento de controlar o, al menos, dirigir la opinión para el mantenimiento del orden se presentó como una

²⁰³ MORALES TAMARAL, JM.: “A la conquista de las masas. Los orígenes de la propaganda estatal en la España..., *op. cit.*, p. 65-83.

²⁰⁴ BARRIO ALONSO, A.: “Movimientos sociales”, en JUNCO, J y SHUBERT, A (eds.): *Nueva Historia de la España Contemporánea (1808-2018)*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018, pp. 437-461, p.452.

alternativa lógica para los distintos gobiernos y, dado que la prensa periódica se había convertido en la difusora de la opinión por excelencia, era necesario poner un límite a la libertad de expresión aprobada en el artículo 34 de la Constitución republicana. En efecto, el antiguo esquema de división de poderes se había transformado, añadiendo los medios de comunicación como un cuarto poder a los otros tres tradicionales. En este episodio de la historia y, ante la falta de rivales en el campo de la comunicación, la prensa concentró en sus páginas un enorme poder.

A partir de ahí surgieron teorías que justificaban la puesta en acción de métodos de control de los mecanismos difusores de la opinión. Según Eduard H. Carr, tras las conferencias de La Paz de París, 1919, se favoreció lo que él llamaba «La cuarta dimensión de la potencia»²⁰⁵. Según este autor, la participación de las masas en la política creó un instrumento de poder, la opinión. Con el objetivo de evitar un uso fraudulento de estos mecanismos de la misma, los teóricos proponían dos condiciones, la existencia de pluralidad en los medios de comunicación y la libertad de circulación de la opinión, y sólo se permitía la censura en condiciones excepcionales, siendo una medida temporal²⁰⁶. En España, durante el periodo republicano, efectivamente, se daban estas premisas. Hemos visto la cantidad de periódicos que existían, de distinta ideología, y también su relación con los diferentes partidos políticos. A partir del estudio de la legislación del periodo, observamos cómo no hubo ninguna norma en la Segunda República Española que prohibiese un tipo de prensa en concreto, aparte de la denominada prensa militar, pero, como ya hemos visto, esto no fue por motivos ideológicos. También que las sanciones no fueron óbice para la continuidad y el prestigio de la prensa consolidada. Según Galo Hernández, la gran perjudicada fue la prensa republicana y de izquierdas sobre todo tras la revolución de octubre de 1934²⁰⁷.

Las circunstancias en las que se proclamó la Segunda República y la situación del orden público que se dio a partir de entonces condicionaron la actitud de los gobiernos, que se dotaron de una legislación que les permitiese controlar el contenido de

²⁰⁵ Edward Hallett Carr (1892-1982), historiador, periodista y teórico de las relaciones internacionales de origen británico.

²⁰⁶ NIÑO, A.: “La propaganda institucional en los regímenes Liberales y el debate sobre el control de la opinión pública”, en MORENTE, F Y RODRIGO, J.: *Tierras de nadie. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias*, Granada, Comares Historia, 2014, pp. 73-95. p. 87.

²⁰⁷ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, G.: “La situación real de la libertad de prensa en España durante la II República: los límites a la aplicación de la libertad de prensa”, en *Comunicación y pluralismo*, nº4, 2007, pp. 119-138, p.134.

las publicaciones siempre que lo considerasen oportuno. Pese a todo, parece que la situación legal de la prensa fue de relativa libertad a lo largo del período, salvo los momentos puntuales que hemos visto, como la quema de conventos durante el Gobierno Provisional, el intento de Golpe de Estado del general Sanjurjo el 10 de agosto, la Revolución de Octubre de 1934 o, en general, durante el efímero gobierno del Frente Popular.

Nada más proclamarse la República, se configuró, sobre todo en Madrid, un clima de fiesta, de agitación. La gente salía a la calle a celebrar y también a protestar. A medida que se iban aprobando reformas, la opinión se iba fragmentando y radicalizando²⁰⁸. En este contexto, la prensa actuó muchas veces como instigadora de esas manifestaciones públicas que, en ocasiones, terminaron dando lugar a situaciones tensas, de enfrentamiento. Una vez pasada la «fiesta» inicial, la prensa, en lugar de calmar los ánimos y abogar por una unificación de la opinión, se centró en todo lo contrario. Los periódicos, como hemos visto, se fueron ratificando en sus posiciones y radicalizando su contenido²⁰⁹. Así las cosas, y, teniendo en cuenta que una de las justificaciones para el uso de estrategias de control de los medios en un gobierno democrático era la defensa del orden público, no es de extrañar que, efectivamente, se usasen en este caso en concreto. Esto había quedado claro desde el principio, desde la aprobación del Estatuto jurídico del Gobierno Provisional del 15 de abril de 1931, en el que se declaraba que las libertades individuales quedaban sometidas a «un régimen de fiscalización gubernativa» para proteger a la República de sus enemigos²¹⁰.

Por todo ello, a la hora de hablar, no ya de la Segunda República española, sino de cualquier período de la historia, es fundamental conocer, en la medida de lo posible, las circunstancias en las que se desarrolló. En este caso en concreto, como hemos ido observando, son muchos los aspectos a considerar y muchos los acontecimientos peculiares que se sucedieron. Resulta complicado hacer una valoración acerca de la aplicación del entramado legal y las consecuencias que tuvo en la prensa y en la opinión. Lo que parece, en este periodo en concreto, es que no había una masa homogénea a la que dirigir, la opinión estaba muy fragmentada y fue ésta una tendencia que aumentó. Si el objetivo desde el poder fue crear una opinión unificada y a favor de

²⁰⁸ BARRIO ALONSO, A.: “Movimientos sociales”..., *op. cit.*, p. 5.

²⁰⁹ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, G.: “La situación real...”, *op. cit.*, p. 134.

²¹⁰ MORALES TAMARAL, J.M.: “La propaganda de Estado...”, *op. cit.*, p. 193.

la República con el fin de conseguir el mantenimiento de esta forma de Estado, se podría decir que el intento de control de la opinión pública se quedó en un intento fallido. Lejos de conseguir unificar la opinión y dar solidez al nuevo régimen, la tendencia fue contraria. En lugar de acabar con los disturbios y de unificar la opinión, ésta fue radicalizándose en posturas distintas que se contraponían entre sí. La diversidad de ideologías en alza, manifestadas a través de la prensa, no hacía sino aumentar ésta tendencia.

5. BIBLIOGRAFÍA

- ABAD AMORÓS, M.R.: “Estudio en torno a la Ley de Defensa de la República”, en *Revista de Ciencias de la Información*. Nº3, Madrid, Universidad Complutense, 1986.
- ALMUIÑA, C.: “Prensa republicana y opinión pública en España entre 1868 y 1936”, en CHECA, A., ESPEJO, C., LANGA, C., VÁZQUEZ, M. (COORDS) *La comunicación durante la Segunda República y la Guerra Civil*. Madrid, Fragua, 2008, pp. 27-28.
- ÁLVAREZ JUNCO, J y SHUBERT, A (eds.): *Nueva Historia de la España Contemporánea (1808-2018)*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018.
- ÁLVAREZ TARDÍO, M Y DEL REY, F. (eds.) : *El laberinto republicano. La democracia española y sus enemigos. (1931-1936)*, Barcelona, RBA, 2012
- BALBÉ, M.: *Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1923)*, Madrid, Alianza universal, 1985.
- BARREIRO, C.: “Aproximación al estudio de la prensa durante la Segunda República”, en *RE-Presentaciones*, Nº 3, 2007, pp.57-76.
- BARRIO ALONSO, A.: “Movimientos sociales”, en JUNCO, J y SHUBERT, A (eds.): *Nueva Historia de la España Contemporánea (1808-2018)*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018, pp. 437-461
- CAPELLÁN, G.: *Opinión pública, Historia y presente*, Madrid, Trotta, 2008.
- CENDÁN PAZOS, F.: *Historia del derecho español de prensa e imprenta (1502-1966)*. Madrid, Editora Nacional, 1974.
- CHECA, A.; ESPEJO, C.; LANGA, C.; VÁZQUEZ, M. (COORDS): *La comunicación durante la Segunda República y la Guerra Civil*. Madrid, Fragua, 2008.
- CHECA GODOY, A.: *Prensa y partidos políticos durante la II República*. Madrid, Universidad de Salamanca, 1989.
- CLAVERO, V.: *Crónica del día en que España amaneció republicana*, Madrid, Catarata, 2015.
- CRUZ MINA, M.: “ABC en la preparación ideológica del 18 de julio”, en TUÑÓN DE LARA, M (dir.): *Comunicación, cultura y política durante la II*

República y la Guerra Civil, Tomo II. España (1931-1939), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2008, pp. 11-34.

- DE LA IGLESIA, C.: *La censura por dentro (1930)*, Madrid, Fragua, 2017.
- DEL VALLE, J.A.: “La censura gubernativa de prensa en España”, en *Revista de estudios políticos*, nº 21, 1981, pp. 73-126.
- FONTECHA PEDRAZA, A.: “La tierra (1930-1935)”, en VVAA: *Prensa obrera en Madrid 1855-1936*. Madrid, Índice, 1987, pp. 369-381.
- FRANCISCO FUENTES, J., FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.: *Historia del periodismo Español*. Madrid, Síntesis, 1997.
- FUSI, JP.: *Un siglo de España. La cultura*. Madrid, Marcial Pons, 1999.
- GÓMEZ APARICIO, P.: *Historia del periodismo español. De la dictadura a la Guerra Civil*. Madrid, Editora Nacional, 1981.
- GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, E.: *Aproximación Histórica al derecho de la imprenta y de la prensa en España (1480-1966)*. Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1977.
- GÓMEZ REINO Y CARNOTA, E.: “La Libertad de Expresión en la II República”, en *Gráfica internacional. Revista de derecho político*. Nº 12, 1981-1982, Madrid, pp. 159-187.
- GONZALEZ CALLEJA, E.: *En nombre de la autoridad. La defensa del orden público durante la Segunda República Española (1931-1936)*. Granada, Comares, 2014.
- GUERRERO MORENO, A.: “La prensa en la Segunda República: breve aproximación como contexto vital de don Diego Martínez Barrio”, en *Ámbitos*, 7-8, 2001, pp. 327-337.
- GUTIÉRREZ-RAVÉ, J.: *España en 1931*. Madrid, Anuario, 1932.
- HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, G.: “La situación real de la libertad de prensa en España durante la II República: los límites a la aplicación de la libertad de prensa”, en *Comunicación y pluralismo*, nº4, 2007, pp. 119-138.
- JULIA, S.: “Prensa obrera en Madrid en los primeros años 30”, en VVAA.: *Prensa obrera en Madrid 1855-1936*. Madrid, Índice, 1987, pp. 339-353.
- LASSWELL, H.: *The person: subject and object of propaganda*. The annals of American academy of political and social science, Vol. 179, Mayo, 1935, pp. 187-193.

- LASSWEL, H.: (1981). “The interconnections of political power, psychotherapy, and world community,” *Political Communication and Persuasion* 1: 107–125.
- MARTÍNEZ PINEDA, C.: *Libertad secuestrada. La censura de prensa en la Segunda República*. Málaga, última línea, 2018.
- MELÉNDEZ MALAVÉ, N.; RAMOS LOZANO, M.^a P.; VERA BALANZA M.^a T.: “Ilusiones republicanas en la prensa local. El caso de dos periódicos malagueños en las vísperas de 1931”, en CHECA, A.; ESPEJO, C.; LANGA, C.; VÁZQUEZ, M. (COORDS): *La comunicación durante la Segunda República y la Guerra Civil*. Madrid, Fragua, 2008.
- MORALES TAMARAL, JM.: “A la conquista de las masas. Los orígenes de la propaganda estatal en la España de entreguerras, 1917-1936”, en *Rúbrica contemporánea*, vol. 5, n.10, 2016, pp. 65-83.
- MORALES TAMARAL, J.M.: “La propaganda de Estado en España, 1914-1936”, en NIÑO, A Y ROSPIR, J.I. (Eds.): *Democracia y control de la opinión pública en el periodo de entreguerras, 1919-1939*, Madrid, Polifemo, 2018, pp. 159-205.
- MORALES TAMARAL, JM.: “No se puede ser gobernante en tiempos de opinión sin ser algo periodista. La propaganda estatal bajo la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)”, en *La Historia, lost in translation?: actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea*, Cuenca, Universidad de Castilla-la mancha, 2017.
- MORENTE, F Y RODRIGO, J.: *Tierras de nadie. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias*, Granada, Comares Historia, 2014.
- NIÑO, A Y ROSPIR, J.I. (Eds.): *Democracia y control de la opinión pública en el periodo de entreguerras, 1919-1939*, Madrid, Polifemo, 2018.
- NIÑO, A.: “La propaganda institucional en los regímenes Liberales y el debate sobre el control de la opinión pública”, en MORENTE, F Y RODRIGO, J.: *Tierras de nadie. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias*, Granada, Comares Historia, 2014, pp. 73-95.
- PAYNE, S.: *La primera democracia española. La segunda República, 1931-1936*. Barcelona, Paidós, 1995.

- PINO ABAD, M.: “Los delitos contra el orden público en el marco de la Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931”, en *AHDE*, 82, 2012, pp.743-759.
- SÁNCHEZ ARANDA, J.J y BARRERA DEL BARRIO, C.: *Historia del periodismo español. Desde sus orígenes hasta 1975*. Pamplona, Eunsa, 1992.
- SEOANE, M.C. Y DOLORES SÁIZ, M.D.: *Historia del Periodismo en España. 3. El siglo XX: 1898-1936*, Madrid, Alianza, 1996.
- SINOVA GARRIDO, J.: *La prensa en la Segunda República Española. Historia de una libertad frustrada*. Barcelona, Debate, 2006.
- SUÁREZ CORTINA, M.: *Los caballeros de la razón. Cultura institucionista y democracia parlamentaria en la España Liberal*, Santander, Genuève, 2019.
- TOWNSON, N.: “El controvertido camino hacia la modernización: 1914-1936”, en ÁLVAREZ JUNCO, J y SHUBERT, A (eds.): *Nueva Historia de la España Contemporánea (1808-2018)*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018, pp. 128-158.
- VILLA GARCÍA, R.: “Los límites de la democratización: elecciones en la Segunda República Española”, en ÁLVAREZ TARDÍO, M Y DEL REY, F. (eds.): *El laberinto republicano. La democracia española y sus enemigos. (1931-1936)*, Barcelona, RBA, 2012, pp.191-291.
- VIROLI, M.: *Republicanism*. Santander, Ediciones Universidad de Cantabria, 2014.

Recurso web del BOE: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1925/080/A01446-01483.pdf>